



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIA GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**



**TESIS**

**“La admisibilidad del proceso de Terminación Anticipada durante la  
Etapa Intermedia a propósito de los fines del Proceso Penal Común”**

**Autora**  
**Bach. De La Cruz Paico, Julia Elizabeth**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**Asesor:**  
**Mag. Ponte Durango Ricardo**

**Lambayeque, 2021**

Tesis denominada: “La adminisibilidad del proceso de Terminación anticipada durante la Etapa Intermedia a propósito de los fines del Proceso Penal Común”, presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:

---

Bach. De La Cruz Paico, Julia Elizabeth  
Autora

---

Mag. Ponte Durango, Ricardo  
Asesor

---

Abog. Martínez Oblitas Carlos Manuel  
Presidente

---

Mag. Delgado Paredes Francisco Santiago  
Secretario

---

Dr. Amador Mondoñedo Valle  
Vocal

## **DEDICATORIA**

La presente investigación se la dedico a  
mi familia por su apoyo constante.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradecemos a Dios por hacerlo posible. Asimismo, a nuestro asesor de tesis.

## INDICE

DEDICATORIA .....	ii
AGRADECIMIENTO .....	iii
INDICE .....	iv
INDICE DE TABLAS .....	viii
INDICE DE ILUSTRACIONES.....	ix
RESUMEN.....	x
ABSTRACT.....	xi
INTRODUCCIÓN .....	12
CAPITULO I.....	16
ASPECTOS METODOLÓGICOS .....	16
1.1. Realidad Problemática.....	16
2.1.1. Planteamiento del problema .....	16
Formulación del Problema .....	21
1.2. Justificación e importancia del estudio.....	21
1.2.1. Justificación de la investigación .....	21
1.2.2. Importancia del Estudio .....	22
1.3. Objetivos .....	23
1.3.1. Objetivo General.....	23
1.3.2. Objetivos Específicos .....	23

1.4. Hipótesis .....	23
1.5. Variables.....	24
1.5.1. Variable independiente .....	24
1.5.2. Variable Dependiente .....	24
1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección.....	24
1.6.1. Métodos .....	24
CAPITULO II .....	28
EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA ETAPA INTERMEDIA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. ..	28
2.1. Naturaleza Jurídica del proceso de Terminación Anticipada. ....	28
2.1.1. Definición de terminación anticipada. ....	28
2.2. La celeridad procesal como justificación del proceso de terminación anticipada. ....	31
2.3. Finalidad De La Terminación Anticipada .....	36
2.4. Criticas A La Eficacia De La Terminación Anticipada .....	37
2.5. Perspectiva constitucional del proceso de terminación anticipada.	
39	
CAPITULO III .....	47
LAS GARANTÍAS PROCESALES DE ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL COMÚN. ....	47
3.1. La finalidad del proceso común. ....	47
3.2. El principio de economía en el proceso penal .....	50

3.3. El principio de celeridad en el proceso penal.....	53
CAPITULO IV.....	57
ANÁLISIS Y RESULTADOS.....	57
Análisis de la posibilidad de incorporara la admisión del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia en relación a las garantías del proceso común.....	57
4.1. Análisis de los resultados: .....	57
4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional. ....	58
4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.....	61
CAPÍTULO V .....	74
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS .....	74
5.1. <b>Discusión de resultados</b> .....	74
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la estructura del proceso especial de terminación anticipada para colegir con la etapa intermedia desde una perspectiva constitucional y los fines del proceso”.....	75
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir las garantías procesales de economía y celeridad procesal en el proceso penal común”. ....	77
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de incorporar la admisión del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia en relación a las garantías y los fines del proceso penal”. ....	80
5.2. La validación de las variables.....	84
5.3. Contrastación de la hipótesis .....	86

CONCLUSIONES .....	88
RECOMENDACIONES .....	90
BIBLIOGRAFÍA .....	91
ANEXOS .....	96
1.    Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ....	96

## **INDICE DE TABLAS**

Tabla 1: Tabulación de los resultados de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los expertos en el Poder Judicial de la ciudad de Chiclayo.. .....	62
Tabla 2: Tabulación de los resultados obtenidos de la afirmación 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo .....	64
Tabla 3: Tabulación de los resultados obtenidos respecto de la afirmación 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo .....	66
Tabla 4: Tabulación de los resultados obtenidos en la afirmación 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	68
Tabla 5: Tabulación del resultado obtenido respecto a la afirmación 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo. ....	70
Tabla 6: Tabulación de los resultados obtenidos respecto a la afirmación 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	72

## INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1; descripción gráfica de la tabulación obtenida del resultado de la afirmación 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	63
Ilustración 2: Descripción gráfica de la tabulación obtenida en función de los resultados de la afirmación 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	65
Ilustración 3: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados obtenidos de la afirmación 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	67
Ilustración 4: Descripción gráfica de la tabulación respecto a la afirmación 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo. ...	69
Ilustración 5: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados respecto a la afirmación 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo. ....	71
Ilustración 6: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados respecto a la afirmación 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo, .....	73

## **RESUMEN**

Esta investigación que lleva por título “La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia a propósito de los fines del proceso penal común”, tiene por finalidad reconocer las posibilidades jurídicas que permitan la ampliación del contexto procesal para que se admita la terminación anticipada en el momento del desarrollo de la etapa intermedia, hasta antes de la oralización del requerimiento acusatorio.

Para tal fin el examen de la realidad se enfoca en el carácter socio jurídico de la aplicación de esta medida, partiendo desde la perspectiva analítica de la interpretación teleológica, asumiendo la importancia de identificar la función de la regla procesal, que para este caso será la celeridad que otorga la figura de la terminación anticipada, basándose en la presencia del consenso en el desarrollo del proceso.

Tal finalidad se orienta al aseguramiento de la economía procesal, toda vez que se percibe como una posibilidad de utilizar menos actuaciones procesales para conseguir el fin de la determinación de actos destinados a lograr la justicia en el menor tiempo posible, favor que beneficia tanto al imputado como a la parte agraviada.

**Palabras Claves:** Admisibilidad, Terminación Anticipada, Etapa intermedia, Proceso penal común.

## **ABSTRACT**

This investigation, which is entitled "The admissibility of the early termination process during the intermediate stage regarding the purposes of the common criminal process", aims to recognize the legal possibilities that allow the expansion of the procedural context so that the early termination is admitted at the time of the development of the intermediate stage, until before the oralization of the accusatory request.

For this purpose, the examination of reality focuses on the socio-legal nature of the application of this measure, starting from the analytical perspective of teleological interpretation, assuming the importance of identifying the function of the procedural rule, which in this case will be the speed granted by the figure of early termination, based on the presence of consensus in the development of the process.

This purpose is aimed at ensuring procedural economy, since it is perceived as a possibility of using fewer procedural actions to achieve the end of the determination of acts destined to achieve justice in the shortest possible time, a favor that benefits both the accused as to the aggrieved party.

**Key Words: Admissibility, Early Termination, Intermediate Stage, Common Criminal Procedure.**

## INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta investigación se proyectó sobre la verificación de la acción del Estado respecto al control de la actividad jurisdiccional, lo cual incluye la verificación de la regulación y estructura jurídica que para este caso importa el proceso penal; específicamente se intenta referir a la correcta aplicación de la terminación anticipada en función su finalidad que se prevé como la de evitar etapas innecesarias respecto a debidas circunstancias, trae como consecuencia favorable para toda la colectividad, dado que se consigue un proceso dotado de garantías.

Para ello se debe tomar como base que el proceso penal, está orientado hacia una finalidad sancionadora basada en el reconocimiento de la responsabilidad, por lo mismo que dicha construcción obedece a la persecución del delito que se orienta hacia los fines antes descritos; siendo así, la regulación de la terminación anticipada respecto a su aplicación merece un examen previo que se enfoque en su finalidad, no sólo a la cuestión de los momentos y formas que se requieren para su admisión; por lo mismo que se encuentra justificada la revisión del esquema legislativo que regula su proceso.

En ese sentido la orientación planteada usa como finalidad el beneficio directo de los imputados y el agraviado, toda vez que el adelantamiento de la decisión provocará no sólo una actuación resarcitoria de manera pronta, sino que además, se estará asegurando un proceso penal óptimo que disminuirá la carga procesal y efectivizará la celeridad y economía procesal.

Teniendo en cuenta todo lo señalado, se creó la formulación de la problemática en razón a un cuestionamiento plasmado de la siguiente manera: ¿Cuál es el argumento jurídico válido para que la admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia permita garantizar los principios de economía y celeridad en el proceso penal común?

Siendo ese el cuestionamiento de la investigación lo que motiva al desarrollo de la tesis, se construyó de manera a priori una respuesta tentativa que se muestra de la siguiente manera: Es admisible el proceso especial de Terminación Anticipada durante la etapa intermedia a partir de una interpretación teleológica de la misma, pues conforma, del mismo modo, un mecanismo de celeridad procesal evitando momentos innecesarios hasta la culminación de la referida etapa.

Debe considerarse que esta construcción se originó en base a las variables que forman parte de la investigación como ejes de estudio, por lo mismo que orientaron la estructura de los objetivos específicos como metas y que a su vez estos permitieron incorporar los contenidos necesarios con el fin de generar certeza doctrinaria y técnica mostrados en la estructura de los capítulos que forman la tesis.

En el Capítulo I, se explica cada uno de los pasos metodológicos que se han desarrollado con el fin de estructurar la guía de investigación, partiendo desde la realidad problemática para llegar a la indicación de los métodos y técnicas que se usaron en el desarrollo de la tesis, permitiendo incorporar el sentido lógico de la observación jurídica que se ha realizado.

Seguidamente en el Capítulo II, la tesis se enfoca a la mirada constitucional sobre el proceso especial de terminación anticipada, ello con la finalidad de propiciar un nivel interpretativo de la naturaleza jurídica de dicha figura, desde el sentido de la normativa que inspira toda la estructura del ordenamiento procesal penal, bajo el contenido garantista que inspira la normativa constitucional.

Luego en el Capítulo III, se ocupa de la revisión de los principios jurídicos que incorpora la economía y celeridad procesal con el fin de establecer su finalidad en la determinación del argumento que permite la incorporación de la terminación anticipada en la etapa intermedia para el desarrollo de la actividad jurisdiccional bajo los términos específicos del garantismo que se presume ofrece el proceso penal.

Es en el Capítulo IV, que se ocupa la investigación de la recopilación de los datos que permiten reconocer la existencia del problema y la consolidación de la orientación del sentido jurídico que da base al argumento jurídico de la postura; así la comprensión de los datos estadísticos y de análisis jurisdiccional juegan un papel importante para dicha labor, apoyados en la opinión de los expertos que permite reconocer el sentido crítico de la investigación.

Finalmente en el Capítulo V, la tesis se encarga de la verificación de la estructura generada a través de las discusiones que corresponden a todas las metas de la investigación que están representados por los objetivos específicos, a fin de alcanzar ciertas posturas que muestran el sentido de la investigación, con lo cual se ha podido construir la estructura de la validación que corresponde a cada uno de los ejes de investigación que forman parte de la hipótesis inicial, esto es las variables,

y con ello construir el sentido de la hipótesis conclusiva; acción que ha conllevado a la comparación de la hipótesis inicial con la que se obtiene como resultado del desarrollo crítico y científico de la tesis, obteniendo con ello la determinación de la contrastación de la hipótesis.

Es en razón de toda esta construcción que se ha podido establecer las conclusiones que guardan relación con las metas trazadas en esta tesis, así como las propuestas que se enfocan al establecimiento de una reestructuración del esquema procesal penal, específicamente sobre la posibilidad de admitir la terminación anticipada en la etapa intermedia al nivel anterior de la oralización del requerimiento de acusación; determinaciones que serán evaluadas por los jurados de esta investigación.

La Autora.

## **CAPITULO I**

### **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

#### **1.1.Realidad Problemática**

En lo que corresponde al desarrollo de esta parte inicial de la investigación, se han planteado los aspectos específicos sobre los cuales se esta produciendo la afectación de la problemática observada, esto es partiendo desde el punto de vista social para mostrar el problema de seguridad que le corresponde al Estado controlas, y luego en lo que corresponde al aspecto jurídico que también debe ser asumido desde el punto de vista del proceso penal para establecer lineamientos más adecuados a fin de que el tratamiento procesal sea equilibrado.

Es por ello que se estructura partiendo de estas muestras del problema desde diferentes ámbitos, como es el planteamiento del problema en sí, para luego lograr subsumir todo el contenido descrito en una sola interrogante que constituye la formulación del problema propiamente dicha.

#### **2.1.1. Planteamiento del problema**

Como se puede apreciar de la realidad existe una tendencia procesal de implementar características propias de un sistema acusatorio a las distintas formas de organización de las sociedades, ha permitido, como una de ellas, la paridad en la actuación por parte de todos los sujetos procesales inmersos en el procedimiento penal. Dicho aspecto se puede evidenciar a partir de distintas manifestaciones como el pleno ejercicio del derecho de defensa, como la posibilidad de declarar y aportar elementos de convicción –para el imputado-, la facultad de poder deducir

excepciones e incluso de acogerse a la aceptación de la responsabilidad penal y civil por los hechos que se le está imputando. Respecto a esto último, es de suma relevancia acotar que la sola aceptación de la responsabilidad penal y/o civil no da lugar, automáticamente, a la imposición de una pena y una reparación civil.

La conformidad que realiza el imputado durante el procedimiento penal tiene relevancia constitucional y procesal. Respecto al primero, dado que al imputado se le reconocen todos los mecanismos idóneos para poder enfrentar un proceso judicial –principio de igualdad de armas–, yendo desde la negación de los cargos hasta su aceptación total o parcial. En lo concerniente a lo procesal, permite la celeridad de una causa penal a efectos de poder lograr el objetivo del proceso penal de manera eficaz, evitando momentos procesales innecesarios. A fin de cuentas, la finalidad debe ser una sola: reparar el daño causado al afectado por un ilícito penal de la manera más célere y eficaz.

Levantando la mirada hacia otras legislaciones, se verifica que este último aspecto no es propio del proceso penal peruano. Por el contrario, las bases de nuestra reforma procesal penal y la instauración de estos mecanismos de celeridad procesal tienen como base los ordenamientos de Italia y España. En efecto, este aspecto, en la legislación italiana, es conocido como el *patteggiamento* o aplicación de la pena a instancia de las partes. En España, este procedimiento está fundado en la *conformidad*. En Alemania, a esto también se le conoce como la *mediación*. Finalmente, Estados Unidos no es ajeno a este reconocimiento estatuyendo el *plea bargaining* o acuerdo negociado norteamericano.

En nuestra legislación, el parto de la terminación anticipada se remonta al artículo 2 de la Ley N.º 26320 y al artículo 20 de la Ley N.º 28008, referidos únicamente a los acuerdos en los delitos de tráfico ilícito de drogas y los aduaneros. Posteriormente con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004, también cobra mayor ejercicio el proceso especial de terminación anticipada para todos los delitos y ya no solo para los expuestos *supra*.

Como tal, la terminación anticipada se constituye como un proceso especial sobre la base de la consensualidad entre las partes sobre la responsabilidad penal, civil y las consecuencias jurídicas que conllevan las mismas. La solución del conflicto penal, de cara a ser un proceso autónomo, encuentra vigor en el principio de celeridad procesal, sin contravenir, el plazo razonable, como parte del debido proceso, pues de manera dispositiva la parte acusada admite su responsabilidad. Incluso, dicho proceso puede concurrir con la institución procesal de la confesión sincera regulada en el artículo 160 del Código Procesal Penal del 2004.

De conformidad a lo establecido por el Acuerdo Plenario N.º 5-2009/CJ-116, el proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible, la pena la reparación civil y las consecuencias accesorias. Así, fluye de lo dispuesto en los incisos 4 y 5 del artículo 468 del CPP. La naturaleza es de este tipo de negocial, por lo que debe existir un acuerdo entre el fiscal y el imputado sobre la pena a imponerse y las demás

consecuencias accesorias que puedan resultar, de ser el caso, así como de la reparación civil. Llegado a dicho acuerdo, una de las partes presenta dicho pedido al juez de la investigación preparatoria, quien deberá evaluar la licitud y proporcionalidad. De acuerdo a ello, declarará la aprobación o el rechazo del mismo.

Realizar una interpretación literal y única del artículo 468 del Código Procesal Penal, traerá como consecuencia negar la posibilidad de la terminación anticipada durante la etapa intermedia; no obstante, consideramos que debe hacerse una interpretación sistemática y teleológica de la misma a efectos de poder entender el espíritu de la ley procesal, y con ello concluir que la admisibilidad de la propuesta es conforme a los principios de nuestro Código Procesal Penal.

La importancia de este proceso especial, como ya se ha mencionado, son los beneficios político-criminales que se obtienen tanto para el imputado así como para, especialmente, el agraviado. Sin duda, al constituirse como un mecanismo de simplificación procesal, la reparación que se obtenga producto del acuerdo negocial permite cumplir con la finalidad del proceso penal que no es otro que tutelar el interés general para mantener la armonía y paz social. No obstante, postulamos que ese beneficio no debería ser el mismo al que señala el artículo 471 del Código Procesal Penal de reducción de la pena de una sexta parte, pues la finalidad de economía procesal si bien se evidencia tanto si el proceso especial tiene lugar en la

etapa de investigación preparatoria como en la etapa intermedia, también es cierto que este principio no tiene los mismos efectos en ambos momentos procesales. Así, si el proceso de terminación anticipada tiene lugar en la etapa de investigación preparatoria es evidente que se evita el tiempo restante para la culminación de toda la etapa de investigación, si fuera el caso, y la etapa intermedia con el juicio oral; por otro lado, si este tiene lugar durante la etapa intermedia, se estaría evitando el resto de dicha etapa incluida la del juicio oral, por lo que el principio de economía procesal opera también en este estadio procesal; sin embargo, no del mismo modo como en la etapa contemplada por la ley procesal penal. En virtud de ello es que proponemos que el beneficio procesal de reducción de la pena debería ser distinto si operan este proceso en ambos momentos procesales, en atención a la política criminal que persigue el legislador al implementar el proceso de terminación anticipada.

En la presente investigación se demostrará, a través de la doctrina jurídica que interpreta los principios regentes de la estructura normativa procesal penal, entre la que se ubica a la institución denominada terminación anticipada puede ser perfectamente aplicable no solo en la etapa de investigación preparatoria, conforme lo expone el ordenamiento jurídico actual, sino, incluso, durante la etapa intermedia dada su finalidad política-criminal. Ello no contraviene su naturaleza jurídica como lo ha señalado la Corte Suprema y distintos autores, sino que, por el contrario, cumple con la finalidad de la misma que el acortar plazos y momentos procesales innecesarios. Por lo que el sustento para adoptar dicha posición no solo es teórico,

sino, además, jurisprudencial conforme lo ha venido resolviendo la Corte Superior de Justicia de Áncash, una vez que ha emitido el Pleno Jurisdiccional que ha sido expuesto en la presente investigación.

Finalmente, una vez expuestos los fundamentos de la presente investigación se pretende contribuir con la aplicación de dicho proceso especial en la praxis judicial a efectos de lograr mejores resultados, aliviar la carga procesal, y, por sobre todo, lograr reparar el daño generado por la comisión de un hecho delictivo.

### **Formulación del Problema**

¿Cuál es el argumento jurídico válido para que la admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia permita garantizar los principios de economía y celeridad en el proceso penal común?

## **1.2. Justificación e importancia del estudio**

### **1.2.1. Justificación de la investigación**

De la observación de la realidad se encuentra una justificación para el estudio que ocupa a esta investigación, respecto a la seguridad jurídica que se supone es una labor de control que ha de ejercer el Estado peruano a través de las formulas jurídicas que se generen para tal fin, ello respecto a la correcta aplicación de la terminación anticipada en función su finalidad que se prevé como la de evitar etapas innecesarias respecto a debidas circunstancias, trae como consecuencia

favorable para toda la colectividad, dado que se consigue un proceso dotado de garantías.

Luego se puede ubicar una justificación de corte legislativo, puesto que la estructuración secuencial de lo que corresponde al proceso penal, esta orientada hacía una finalidad sancionadora basada en el reconocimiento de la responsabilidad, por lo mismo que dicha construcción obedece a la persecución del delito que se orienta hacia los fines antes descritos; siendo así, la regulación de la terminación anticipada respecto a su aplicación merece un examen previo que se enfoque en su finalidad, no sólo a la cuestión de los momentos y formas que se requieren para su admisión; por lo mismo que se encuentra justificada la revisión de el esquema legislativo que regula su proceso.

### **1.2.2. Importancia del Estudio**

De acuerdo a los dos aspecto principales que se toman como justificación del problema, se ha podido advertir la importancia de la investigación, dado que el hecho revisor de la estructura legislativa que en el proceso penal recoge a la terminación anticipada como una figura que se orienta a evitar etapas innecesarias durante la investigación, tendrá como consecuencia un efecto positivo sobre el común de los ciudadanos de forma general, toda vez que genera seguridad jurídica que incluso se relaciona con la seguridad ciudadana.

Siendo los beneficiarios en segundo lugar pero de manera directa los imputados y el agraviado, toda vez que el adelantamiento de la decisión provocará no sólo una actuación resarcitoria de manera pronta, sino que además, se estará

asegurando un proceso penal óptimo que disminuirá la carga procesal y efectivizará la celeridad y economía procesal.

### **1.3.Objetivos**

#### **1.3.1. Objetivo General**

Determinar el argumento jurídico válido para que la admisibilidad del proceso de terminación anticipada, durante la etapa intermedia, permitan garantizar los principios de economía y celeridad en el proceso penal común.

#### **1.3.2. Objetivos Específicos**

- Desarrollar la estructura del proceso especial de terminación anticipada para colegir con la etapa intermedia desde una perspectiva constitucional
- Describir las garantías procesales de economía y celeridad procesal en el proceso penal común.
- Analizar la posibilidad de incorporar la admisión del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia en relación a las garantías del proceso común.

### **1.4. Hipótesis**

Es admisible el proceso especial de Terminación Anticipada durante la etapa intermedia a partir de una interpretación teleológica de la misma, pues conforma, del mismo modo, un mecanismo de celeridad procesal evitando momentos innecesarios hasta la culminación de la referida etapa.

## **1.5.Variables**

### **1.5.1. Variable independiente**

La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia

### **1.5.2. Variable Dependiente**

Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común.

## **1.6.Métodos, técnicas e instrumentos de recolección**

### **1.6.1. Métodos**

La investigación que se ha desarrollado ha tomado como base metodológica el uso de ciertas herramientas que permitirán dar el sentido científico a los resultados que se obtengan de la observación sobre la realidad que se pretende estudiar en torno a la aplicación de la terminación anticipada y su eficacia en relación con los principios procesales que se recogen en el Nuevo Proceso Penal.

Teniendo en cuenta que el sentido de la aplicación de los principios es de un corte interpretativo para una mejor conducción de la ciencia penal y procesal penal, se ha tenido que optar en primera línea por una mecánica de observación que parte de la interpretación, así la comprensión de los elementos que componen las reglas que orientan la aplicación de la terminación anticipada serán analizadas jurídicamente desde una perspectiva individual en tanto regla, así como en función al sistema del que se son parte.

### Método Exegético Jurídico

En virtud del contenido de la investigación, se hace necesaria la aclaración de que este método no intenta referirse a la postura dogmática de la aplicación de la ley en sentido estricto como única forma de ejecución del derecho, sino que se orienta a una observación individual que pretende reconocer la composición de la regla desde la apreciación de su contenido textual, así la estructura gramatical que compone su texto será lo que marque la acepción que se tenga de la misma, ello con la finalidad de utilizar ese sentido literal que pudiera ser quizá el aspecto que limitaría la correcta aplicación de la propia ley, incorporando incluso la posibilidad de que la figura jurídica sea apropiada pero la regla que la describe adolezca de algún tipo de problema.

### Método Sistemático Jurídico

Siguiendo la línea de observación de las leyes a través de su interpretación, será utilizado este método sistemático con el fin de reconocer el enlace que tienen las reglas analizadas como es el caso de la configuración de la terminación anticipada en el ordenamiento procesal penal, con el resto del ordenamiento jurídico.

Aspecto que se tendrá en cuenta tanto con la norma, esto es la Constitución, cuanto con las leyes de igual o inferior rango; en el primer caso se verificará el sentido que se asume al encontrar incluidas en la norma los principios que rigen la estructura garantista del proceso penal, luego respecto a las reglas del mismo o inferior orden, se podrá establecer si resultan lo suficientemente apropiadas para

garantizar la correcta ejecución de la figura de la terminación anticipada para alcanzar sus fines procesales y las garantías que se presume son características del derecho penal en el actual sistema.

#### Método hipotético deductivo

Para el caso de la aplicación de métodos orientados a la observación de la realidad desde la perspectiva jurídica, se ha tenido en cuenta la aplicación del método hipotético deductivo, con el cual se ha podido reconocer la realidad respecto a la forma en que se esta aplicando la regla de la terminación anticipada, siendo importante tener en cuenta que se parte del aspecto general que es la regla misma o la construcción en base a la orientación de oportunidad que se ofrece en el esquema procesal penal.

En base a dicha observación que se ha podido reconocer la forma en que la finalidad de la terminación anticipada no alcanza la plenitud en todos los aspectos o posibilidades en las que debiera aplicarse, así pues el resultado esencial que es la celeridad y economía procesal no resultan lo suficientemente concretados en todas las fases previas al enjuiciamiento, lo cual constituye el aspecto específico de la observación.

#### Método inductivo

Habiendo comprendido que existe insuficiencia de los principios de celeridad y economía procesal en la aplicación de la terminación anticipada, se verifica como un punto de partida de tipo específico para luego alcanzar el entendimiento de la necesidad respecto a una reformulación o cambio específico de

la ley que contempla esta regla, por lo mismo que sería el carácter general en el que se aplica el análisis.

## **CAPITULO II**

### **EL PROCESO ESPECIAL DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA ETAPA INTERMEDIA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL.**

El capítulo que a continuación se desarrolla tiene por finalidad enfocar la naturaleza jurídica de la terminación anticipada, con la intención de reconocer sus aspectos más saltantes que permiten conseguir el efecto garantista que resulta ser la característica esencial del proceso penal en el Perú.

#### **2.1. Naturaleza Jurídica del proceso de Terminación Anticipada.**

A efectos de lograr adecuadamente el cumplimiento de esta tarea, se incluirá en el contenido la comprensión más cercana de su definición, su finalidad y los efectos que produce, para luego trasladar tal información hacia la interpretación desde la perspectiva constitucional como un examen del cumplimiento de sus normas en tanto seguimiento de los principios.

##### **2.1.1. Definición de terminación anticipada.**

Por lo mismo que se ha considerado prudente recopilar fuentes cuyos contenidos conlleven a establecer el significado de una institución como esta, respecto a la concepción doctrinaria, en ese sentido es correcto tener en consideración la definición planteada por Córdova (2019), en su libro titulado “La terminación anticipada. Una mirada al proceso de terminación anticipada con pluralidad de imputados”, en el cual señala que esta figura es un: “(...) un instrumento para el logro de una justicia eficaz y rápida, con la debida protección de las garantías de los imputados que participan en dicho proceso especial”. (p. 7)

Resulta importante reconocer el aspecto tomado sobre la eficacia de la justicia que señala la autora citada, pues de ello ha de partir el sentido de la presente investigación,

toda vez que lo que realmente importa es el proceso penal que se celebra en el cual se discute una circunstancia cuyo resultado generará limitaciones con efectos irreversibles sobre la persona en quien recaiga la sanción.

De ese modo resulta pues interesante el hecho de las garantías que se presume el Estado esta en la obligación de brindar de una manera directa a fin de asegurar el cumplimiento de aquellos derechos que tienen la característica de fundamental, los mismos que se resguardan en el ámbito penal en tanto se trata de discutir la responsabilidad sobre determinado hecho punible.

Siendo así, las características de eficacia y rapidez que se incorporan en la definición de la terminación anticipada, en tanto finalidad de la misma, resulta ser el eje temático de este capítulo, por lo mismo que se procede a reconocer su concepción desde la perspectiva constitucional, pero previo a ello es prudente entender lo que es un proceso eficaz y rápido, partiendo del aspecto de la eficacia se puede ubicar como apropiada la consignación del investigador Robles Sevilla (2012) quien en su artículo jurídico titulado *Hacia la eficacia y celeridad en el proceso penal peruano: reflexiones en torno a la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en el código procesal penal 2004*, en el mismo que indica lo siguiente:

(...) un proceso penal será más eficaz siempre que se resuelva dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Sin embargo, el respeto de los plazos, si bien constituye un tema que garantiza un debido proceso, no resuelve el problema de la gran cantidad de casos sin resolver en nuestra administración de justicia (pág. 4)

Es interesante el cómo se relaciona la eficacia con la presencia del plazo procesal el mismo que adquiere la característica de razonable, entendiéndose con ello quizá que la cuantificación o el establecimiento exacto de la temporalidad para los plazos deberá

razonarse antes de ejecutarse lo que especifica la regla; peculiar forma de ver o más bien cuestionar el sentido de lo dicho por este autor en función a la razonabilidad del plazo.

Quiere decir acaso ello que el marcador impuesto por la regla podrá rebasarse o disminuirse bajo la excusa de la razonabilidad, lo cual, pues para efectos de una reducción si resultaría efectivo y garantista, pero si sucede lo contrario, es decir que base a la razonabilidad se pueda justificar la dilación temporal del desarrollo del proceso; que es precisamente el otro aspecto que se comenta sobre la cita recogida, la dilación indebida.

Sobre el aspecto indebido de la dilación se puede reconocer nuevamente una justificación, quiere decir que hablar de ello como indebido trae como razonamiento consecuente la existencia de algo debido, esto es que existirán dilaciones que resultan siendo apropiadas o como lo dice el autor, debidas.

El sentido de la razonabilidad tiene que ver con el aspecto de la justificación del hecho, es decir, que la circunstancia que provoca la demora pueda ser comprendida como inevitable o ajustada a razones propias del mismo proceso, como por ejemplo el efecto que produce la cantidad de casos que son ingresados al sistema judicial para su atención, lo cual se traduce en un servicio lento en la revisión, ello en la actualidad se ha convertido en la justificación más común que se otorga al incumplimiento de los plazos procesales en el ámbito penal.

De acuerdo a lo señalado hasta aquí, es correcto entender que la terminación anticipada tiene una relación directa con el aspecto del cumplimiento de los plazos y como efecto directo un resultado que soluciona el problema de la dilación o demora en la administración de justicia, por lo mismo que se procederá a continuación a describir el sentido de esta relación.

## **2.2. La celeridad procesal como justificación del proceso de terminación anticipada.**

En función al enfoque de la investigación, lo que se precisa para establecer la relación entre la justificación de esta figura de conclusión del proceso y la celeridad comprendida como uno de los principios que lo rigen, es reconocer el sentido del proceso penal, así la reestructuración del mismo producida desde el año 2004 ha generado no sólo un esquema garantista sino que agrega además una característica de celeridad, tal cual lo señala la investigadora Villavicencio Rios (2010) quien en su artículo titulado “Apuntes sobre la celeridad procesal en el nuevo modelo procesal penal peruano”, donde indica que: “(...)la estructura del proceso común que establece plazos cortos e institutos procesales, que se caracterizan por su celeridad, como la acusación directa y los procesos especiales: el proceso inmediato y el de terminación anticipada”. (p. 93)

El sentido de lograr un proceso garantista incluye en su estructura, características que se relacionan necesariamente con la celeridad puesto que la prontitud de la respuesta de parte del sistema judicial hace del proceso un mecanismo rápido y con ello asegura cuando menos la fluidez en el acceso a la justicia, ello sin duda se relaciona directamente con el debido proceso como la garantía más amplia en el derecho penal.

Definitivamente la relación existente entre garantismo y eficacia es verificable de acuerdo a lo señalado por Neyra Flores (2010) al señalar que: “(...) es fundamental que se entienda la relación de esos dos conceptos no como contradictorios o excluyentes sino como necesarios y concurrentes en la configuración de un debido proceso”. (Neyra Flores, 2010); en ese sentido se aprecia el vínculo que la eficacia y su concepción de celeridad y economía procesal, tienen con el debido proceso.

Tal acepción se puede reconocer constitucionalmente, puesto que su debido proceso esta contemplado en este cuerpo legal, pues así lo señala el jurista Landa Arroyo

(2002) quien en su obra *El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional*, en el cual manifiesta que:

En el marco de la teoría de la garantía procesal de los derechos fundamentales, se puede interpretar que la Constitución de 1993 ha consagrado por vez primera como principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional(...). (pág. 447)

Este paso respecto al reconocimiento del debido proceso en el ámbito constitucional le otorga una categoría especial que genera la necesidad de que se procure su cumplimiento en el proceso, así esto al constituirse como un principio adopta internamente características que deben seguirse como es el que interesa para esta investigación, el cumplimiento de los plazos y la economía procesal.

Es precisamente sobre esta base del reconocimiento constitucional que se le otorga al debido proceso que se erigirá la propuesta de la investigación, así pues, el sentido de sugerir la aplicación de la terminación anticipada está orientado a dotar de celeridad al proceso en sí, en tanto reúna las características que adviertan la posibilidad de evitar procedimientos innecesarios.

También resulta apropiado hacer la verificación de la definición de esta fase en el ordenamiento y su percepción por parte de la jurisprudencia, por lo mismo que se debe tener en cuenta lo señalado por el Acuerdo Plenario 6-2010, en el cual sobre la investigación preparatoria señala que esta figura: “(...) es la comunicación formal que el fiscal dirige al imputado para efectos de hacer de su conocimiento la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, la correspondiente calificación jurídica específica y, por ende, que se va a realizar una investigación formalizada en su contra, posibilitándole a través de su abogado defensor, aportar los medios de investigación y de

prueba que estime pertinentes”; de otro lado cabe indicar aquello que también se indica respecto a las acciones de fiscalía, así pues resulta de su responsabilidad el hecho de marcar la actuación de la diligencia para desarrollarse durante la investigación; esto es que: “(...) el Ministerio Público considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen la suficiencia fáctica y probatoria del hecho y la vinculación del imputado al mismo, dispondrá la formalización de la investigación preparatoria, estableciendo las diligencias que de inmediato deben actuarse”. (Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, 2011)

Durante la Investigación Preparatoria, el Fiscal dispone o realiza nuevas diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles; no pudiendo repetir las efectuadas durante las diligencias preliminares. Estas solo pueden ampliarse siempre que ello sea indispensable, se advierta un grave defecto en su actuación previa o ineludiblemente deba completarse por la incorporación de nuevos elementos de convicción. El Fiscal puede exigir información de cualquier particular o funcionario público. Asimismo, cualquiera de las partes procesales puede solicitarle la realización de diligencias adicionales. (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 2017)

Según la publicación hecha por León Velasco, (2012) basado en el artículo 321.1 indica que respecto a esta etapa se proyecta con la intención de observar la participación de la evidencia útil y suficiente para el reconocimiento de la responsabilidad penal respecto de los participantes en el suceso antijurídico, todo ello con el fin de lograr: “(...) acusación o desestimar ella, o en palabras del propio código, a “reunir los elementos

de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa”. (p. 1)

De acuerdo al artículo publicado por Oré Guardia y Loza Avalos, (2017), acerca de esta fase procesal como una de condición inicial o previa que prepara la situación procesal y jurídica a fin de comprender adecuadamente la realidad del ilícito; así muestra las finalidades como: “Reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo (...) El fiscal formula o no acusación (...) el imputado prepara su defensa. Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de su perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado” (pp. 163-177)

#### **a. Etapa intermedia**

En lo que corresponde a esta fase, se la ubica incorporada como segunda la cual conlleva a la investigación de un delito realizado de tal modo que, habiéndose realizado una investigación inicial como lo sería la investigación preparatoria, se tendría una base para continuar con la acusación de manera escrita u oral según lo dictamine el encargado de realizar la acusación, es así que en tal sentido se consideran los aportes realizados por diferentes autores quienes ayudaran a entender de una mejor manera a cerca de lo que se trata esta fase procesal.

Es así tal cual lo señala el jurista Oré Guardia y Loza Avalos, (2017) quienes definen a la etapa intermedia como aquella que se orienta en el supuesto

de que: “(...) los juicios deben ser preparados y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable (...) un mecanismo de persecución y descrédito de las personas antes que como un mecanismo institucionalizado para resolver los conflictos penales”. (pp. 163-177)

Por otro lado León Velasco, citado en (Neyra Flores, 2012) acerca de la etapa intermedia menciona que esta etapa se le puede denominar: “(...) bisagra que permite abrir o no la puerta del juicio oral; es una audiencia de preparación y saneamiento, en donde se discutirá si en efecto existe una causa probable que amerite ser sometida al debate probatorio del juicio oral”. (p. 1)

Además de ello es preciso indicar que la legislación procesal no es muy precisa respecto a la definición de esta etapa, por lo que Neyr (2012) la conceptúa como: “(...) una etapa de filtro que tiene como función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y de la acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin de establecer si es viable para convocar debate penal pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o preclusión del proceso”. (pág. 1)

Según Rodríguez Hurtado et al. (2019) en su libro titulado “*Manual de la Investigación Preparatoria del Proceso Penal Común*” indican sobre la etapa intermedia que se basa en: “(...) la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad eficiente y responsable”; esto ya se hubo advertido con anterioridad, sobre todo es importante resaltar la función del Ministerio Público que para esta fase: “(...) permitirá garantizar que a juicio solo vayan los casos idóneos para obtener una condena. En cambio, la defensa propugnará realizar un filtro de

pruebas y podrá hacer fenecer el proceso con salidas como los medios técnicos de defensa”. (p. 35)

### **2.3. Finalidad De La Terminación Anticipada**

El fundamento de la Terminación Anticipada se cimienta en la necesidad de lograr una justicia rápida y eficaz, siendo una expresión destacada de la justicia penal negociada. (...) Fortalecer la actuación de los operadores de justicia en la aplicación del proceso especial de Terminación Anticipada, con miras a descongestionar la carga procesal. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014, pág. 1)

Dentro de la naturaleza de este procedimiento, también encontramos sustratos de política criminal, ya que el principal objetivo es la consecución de una rápida y eficaz justicia, con la debida observancia del principio de legalidad. En este sentido (...) deberá entenderse como un consenso entre fiscal y el imputado que supone la aceptación de los cargos, y su finalidad es concluir el proceso de forma rápida impidiendo así su prolongación; es decir, seguir con la etapa intermedia y la de juzgamiento que incluye el juicio oral. (Villanueva Haro, 2013, pág. 4)

(...) evitar la continuación de la investigación judicial y el juzgamiento si de por medio existe un acuerdo entre el imputado y el fiscal, aceptando aquel los cargos de imputación y obteniendo por ello el beneficio de la reducción de la pena en una sexta parte. Se trata en esencia de una

transacción penal para evitar un proceso innecesario. (Sánchez Velarde, 2008, pág. 47)

El desarrollo de la actividad procesal en esta fase es importante tanto a nivel de celeridad así como a nivel de la cantidad de actuaciones que se ejecutan durante el proceso, por lo mismo que se debe señalar que el principio de economía tiene su base en: “ (...) el acuerdo entre el imputado y el fiscal, quienes acuerdan concluir el proceso con una aceptación de los cargos por parte del imputado a cambio de una reducción de un sexto de la pena probable acordada entre las partes”. (Cerron Valverde, 2015, pág. 127)

#### **2.4. Críticas A La Eficacia De La Terminación Anticipada**

De acuerdo a la observación de la realidad jurídica respecto a la aplicación de esta figura es posible establecer ciertas críticas en cuanto a la función que cumple o mas bien a la efectividad de su aplicación, sobre todo en lo que se refiere al acceso a dicha figura, por ello es importante tener en consideración, pues su finalidad de ahorro de tiempo y de dinero para el estado en el desarrollo de procesos que resultarían inútiles, tiene una base social, así pues: “(...) ante la realización de un delito, la sociedad y la víctima requieren una solución rápida de la justicia formal, la cual debe dirigirse a la satisfacción de la pretensión penal con la imposición de la pena al delincuente dentro de los parámetros legales y la pretensión civil con la efectiva reparación del daño causado”. (Cerron Valverde, 2015, pág. 124)

El acceso a la justicia siempre resulta ser una labor que le corresponde al Estado y se debe asumir con la suficiente importancia del caso para que los resultados de la política pública criminal que se aplica a fin de resolver este problema social, rinda los efectos que se espera de la función de control de parte del gobierno, así pues el sentido

de generar rapidez no solo se enfoca a la acción de beneficio para la parte afectada o para el imputado sino también para el propio aparato de justicia.

Sobre eso es que se puede apreciar el hecho de que: “(...) Al concluir los procesos en períodos cortos va a permitir que disminuya la carga procesal con lo cual se beneficia no solamente a las partes de un proceso, sino al mismo Poder Judicial, ya que les va a permitir atender con prontitud los demás procesos y no tener una carga abultada que no le permita cumplir a cabalidad sus funciones, y perjudicando la imagen institucional”. (Cerron Valverde, 2015, pág. 131)

El artículo 20° de la “Ley N° 28008”, se reconoce como la regla que termina afectando el sentido propio de la figura de terminación antelada del proceso, entendido este como una forma de simplificarlo y otorgarle un dote eficaz en sus efectos procesales, en función de lo cual se reconoce como carente de eficacia desde el punto de vista normativo, toda vez que: “(...) se inobserva el Principio de Igualdad y afecta el Principio de Celeridad y Eficacia Procesal, además no contempla la celebración de reuniones preparatorias informales, el traslado de la solicitud de incoación del proceso a las partes, ni el plazo establecido para ello, no regula el proceso en caso de concurrencia de pluralidad de imputados. Genera falta de uniformidad en las decisiones judiciales, en tanto converge el artículo 20° de la Ley N° 28008, las normas del NCPP, y el AP 5-2009”. (Arroyo Acostupa, 2016, pág. 108)

## **2.5. Perspectiva constitucional del proceso de terminación anticipada.**

El programa constitucional que se encuentra vigente a la fecha ampara, de manera superlativa, el estricto respeto por los derechos fundamentales de todos aquellos que se sujeten a dicho programa. Este abarca no solo los aspectos mínimos de convivencia social sino, incluso, se extiende a todos los procedimientos sobre los cuales el Estado va a ejercer competencia para resolver conflicto a partir de tal convivencia.

Lo que se busca y espera, a fin de cuentas, es que cuando haya existido un sujeto vulnerado -sujeto pasivo- por un inadecuado comportamiento social -proveniente del sujeto activo-, este sea resarcido o restablecido al estado anterior de dicha vulneración. Este aspecto se ve maximizado cuando dicho comportamiento importa la vulneración de bienes jurídicos de tal magnitud que es necesaria la intervención del Derecho Penal, en vigor del principio de trascendencia, además de “última ratio”, pues dicha finalidad respecto a esta ciencia no podrá ser posible si interviene otro aspecto del Derecho, sino, únicamente, la de la especialidad penal. Nuestra carta magna ha entendido perfectamente este aspecto, por lo que en su conformación hallamos principios, garantías y derechos y que van a servir como pilares para la actuación e interpretación de las leyes penales y procesales que serán el eje de los operadores jurídicos.

Del mismo modo, el Título Preliminar del Código Procesal Penal del 2004 establece el norte que deben tener los operadores cuando exista conflicto, incluso cuando no lo haya, entre las leyes procesales penales. En suma, la finalidad es una sola: resarcir la afectación generada por la comisión de un ilícito penal en el menor tiempo posible y con el respeto de los derechos y garantías de los sujetos intervinientes en el procedimiento penal, todo ello, conformando un debido proceso penal.

Para llegar a ello, el legislador ha establecido un proceso penal común que será el canal por el cual todas las causas penales deberán someterse ante la comisión de un delito. No obstante, pueden existir particularidades durante el procedimiento que habilitan la apertura de procesos especiales y esto puede obedecer ya sea por la naturaleza del delito, por la naturaleza del agente que lo comete, por el bien jurídico que se tutele, por la forma en la que se cometió el delito, por la forma en la cual se inicia el proceso o por la conformidad que pueda desplegar el sujeto imputado por un delito. Sobre este último aspecto, nuestro ordenamiento jurídico procesal contempla, específicamente, el proceso especial de terminación anticipada, el cual se basa en el principio de celeridad procesal. Por ello mismo, la finalidad de este proceso es evitar momentos procesales innecesarios a efectos de reparar la lesión y el daño generado por el ilícito penal.

El resarcimiento rápido del daño sufrido por la víctima a través de la reparación civil es un punto para destacar de los logros a través de la terminación anticipada que también beneficia a la imagen del Poder Judicial. (Cerron Valverde, 2015)

Ahora bien, la regulación actual de este proceso especial lo encontramos en los artículos 468-471 del Código Procesal penal, mediante los cuales se establecen cuáles son las características de dicho proceso, su procedimiento, el beneficio que obtiene el sujeto que se acoge a dicho proceso y la particularidad cuando hay varios imputados. A partir de ello, se evidencia que la terminación anticipada se constituye a partir de un acuerdo entre el fiscal y el imputado para obtener una respuesta y solución eficaz ante hechos delictivos a favor del agraviado.

La urgente necesidad de permisión y aplicación de la terminación anticipada, como mecanismo de simplificación procesal, aún en fase intermedia, puesto que la aparente imposibilidad normativa para hacerlo es salvada con los principios procesales y una interpretación sistemática,

que no sólo se limite al Código, sino que sea integral; incluyendo la revisión constitucional. (Díaz Romero, 2016, pág. 91)

Por otro lado, el “proceso penal común” es posible subdividir por 3 subetapas que la conforman: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. La primera de ellas encuentra su finalidad en realizar todos los actos de investigación de cargo y de descargo a efectos de verificar la comisión de un hecho delictivo, así como de sus eventuales responsables penal y civilmente que se encuentra a cargo del Ministerio Público, con el cual culmina dicha etapa con la emisión del requerimiento de acusación, sobreseimiento o mixto. La segunda, es la etapa de control y subsanación de la actuación investigativa del fiscal a cargo del juez de investigación preparatoria, así como de preparar el eventual juzgamiento. La última, tiene como finalidad la actividad probatoria por parte de los sujetos procesales a efectos de que se discuta la responsabilidad penal y civil del acusado, culminando dicho estadio con la emisión de la sentencia. Para la presente investigación es de importancia referirnos únicamente a la etapa intermedia del proceso penal común, dado que ahí se va a generar el punto de discusión del trabajo dado que encontraremos posiciones contrarias a admitir el proceso especial de terminación anticipada en el proceso penal común.

Queda demostrada que la realidad jurídica para la cual fue creada este mecanismo de simplificación procesal ha sido superada por la positiva y acertada aplicación de la misma, como criterio de oportunidad; en el mundo del derecho. De ahí la urgente necesidad de una modificación legislativa que contemple dicha inclusión en la Etapa Intermedia. (Díaz Romero, 2016, pág. 92)

Esto es así, dado que en el artículo 350 del Código Procesal Penal del 2004, se establece lo siguiente respecto al requerimiento de acusación, el cual da por concluida la

etapa de investigación preparatoria, entre lo que se puede citar: “Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección; Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos; Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, en lo pertinente; Pedir el sobreseimiento; Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad”.

Asimismo, en el artículo 468 del Código Procesal Penal de 2004, lo siguiente referido al momento de poder admitir el proceso especial de terminación anticipada:

Artículo 468 Normas de aplicación.- Los procesos podrán terminar anticipadamente, observando las siguientes reglas:

1. A iniciativa del Fiscal o del imputado, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, una vez expedida la Disposición Fiscal del artículo 336 y hasta antes de formularse acusación fiscal, pero por una sola vez, la celebración de una audiencia de terminación anticipada, de carácter privada. Su celebración no impide la continuación del proceso. Se formará, al respecto, cuaderno aparte.

En función a esta regla se puede advertir lo siguiente: i) la investigación preparatoria culmina con la emisión del requerimiento de acusación, ante el cual los sujetos procesales pueden postular criterios de oportunidad; ii) el proceso especial de terminación anticipada puede tener lugar una vez que se formalice la investigación preparatoria y hasta antes que se emita el requerimiento de acusación; y iii) este proceso especial solo puede ser instaurado una sola vez.

Por lo que, se advierten posturas contrarias que han llevado a la confusión a los operadores jurídicos sobre admitir el proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia. Esta problemática también ha sido recogida por la Corte Superior de Justicia de La Libertad. El 19 de octubre de 2018, se llevó a cabo el Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Penal en la Corte Superior de Justicia de Áncash, donde se debatió este tema que es objeto de la presente investigación: “Necesidad de reevaluar la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del Código Procesal Penal”. En dicho pleno se esbozaron dos posturas contrarias:

*i) Por una parte, se sostenía que no es procedente la terminación anticipada en la etapa intermedia porque se desnaturaliza el proceso común y trasgrede el principio estructural de contradicción procesal así como por no cumplir su finalidad político-criminal.*

ii) Por otra parte, se argumentaba que sí es procedente, a partir de una interpretación amplia, pues el fin de la terminación anticipada, es la de evitar etapas y audiencias innecesarias, además deben en cuenta la carga procesal que afrontan las fiscalías y juzgados en todo el país, así como las circunstancias especiales presentadas en dicha etapa como la del reo ausente.

Dicho Pleno Jurisdiccional llegó a la conclusión, por mayoría, que sí es procedente la aplicación de la terminación anticipada durante la etapa intermedia.

La totalidad de los juristas coinciden en aceptar la influencia de la tradición jurídica anglosajona en la construcción de la terminación anticipada en nuestro ordenamiento jurídico y, en realidad, son pocos los sistemas jurídicos que no han instaurado la institución del *plea bargaining* ,

concebida como la posibilidad de concluir, y en algunos casos evitar, el proceso tras la negociación entre el Ministerio Público y la defensa del procesado por el Órgano Jurisdiccional. (Arroyo Acostupa, 2016, pág. 107)

La Corte Suprema, al desarrollar el tópico de la terminación anticipada en el Acuerdo Plenario N.º 5-2009/CJ-116, del 13 de noviembre de 2009, ha desarrollado al proceso de terminación anticipada y etapa intermedia del proceso común, llegando a la conclusión de que no es posible su admisibilidad en tal momento procesal. Para arribar a tal conclusión, sostuvieron que el proceso de terminación anticipada no guarda correspondencia con el proceso común. Es un proceso especial sujeto a sus propias reglas de iniciación y con una estructura singular –etapas propias y actuaciones singulares no equiparables con el proceso común, basado en el principio estructural de contradicción y no en el de consenso que informa al primero–. Asimismo, argumenta que el artículo 350.1 del Código Procesal Penal prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, tal referencia, sistemáticamente, sólo remite al artículo 2 del mismo cuerpo normativo. Por lo que, la incorporación del proceso de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común no solo desnaturaliza su regulación propia y naturaleza jurídica, sino que tergiversa otro eje de su reconocimiento en el proceso penal nacional: la función de acortar los tiempos procesales y evitar las etapas procesales comunes intermedia y de enjuiciamiento, siendo este precisamente uno de los fundamentos que permite el beneficio premial de reducción de la pena.

En suma, podemos describir plenamente la problemática que se pretende desarrollar y sentar postura en la presente investigación. De lege lata, el legislador ha establecido que una vez emitido el requerimiento de acusación y notificado a los sujetos procesales, ellos tienen la facultad de instar criterios de oportunidad, los cuales hacen

referencia al “principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio”, siendo que estan regulados en el numeral segundo del Código Procesal Penal. Por lo que, taxativamente, no es permisible la terminación anticipada una vez que se ha emitido el requerimiento de acusación fiscal. No obstante, a ello, ¿puede incluirse, dentro de ellos, al proceso especial de terminación anticipada en atención a su finalidad política-criminal?

En atención a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, tendríamos que sostener que, literalmente, el proceso de terminación anticipada no obedece a un criterio de oportunidad, por lo que, debe rechazarse su admisibilidad una vez que se ha emitido el requerimiento de acusación. Además, taxativamente, el artículo 468 del mismo cuerpo normativo sostiene que este debe solicitarse una vez formalizada la etapa de investigación preparatoria y antes de formularse la acusación fiscal, haciendo referencia pues, únicamente, a la etapa de investigación preparatoria y no a la intermedia.

Por otro lado, a partir de una interpretación teleológica del instituto procesal de la terminación anticipada, tendríamos que sostener lo contrario al párrafo anterior, ello en vigor a que lo relevante, más allá de una descripción literal del legislador, es atender a reparar las consecuencias penales y civiles generadas por la comisión de un hecho delictivo. Si lo que se pretende es evitar momentos procesales innecesarios, evitar la etapa intermedia, admitir la terminación anticipada se va a constituir como un mecanismo o forma de celeridad procesal, evitando así también llegar al juicio oral, a partir de la conformidad otorgada por el imputado previamente. De modo que la admisibilidad de la terminación anticipada durante la etapa intermedia debe tener sustento, incluso, después de haberse emitido el requerimiento de acusación fiscal. Ahora bien, con ello se pone en cuestión si es que el beneficio que se otorga por acogerse a este proceso especial debe mantenerse al momento que procede durante la etapa de investigación preparatoria que al de la etapa intermedia, o debe ser menor dado que el principio de economía procesal tiene

menor vigor que en su forma inicial dada por la normativa procesal. Por lo que se puede cuestionar que el beneficio procesal dado por el proceso de terminación anticipada puede variar en razón del momento procesal en que este es otorgado.

## CAPITULO III

### **LAS GARANTÍAS PROCESALES DE ECONOMÍA Y CELERIDAD PROCESAL EN EL PROCESO PENAL COMÚN.**

La estructura de la investigación invita a crear un espacio en el que se describan aspectos importantes referentes al proceso común sobre todo en lo que se refiere a las garantías procesales de economía y celeridad procesal, siendo así se debe dar inicio con el reconocimiento de la finalidad de este tipo de proceso a nivel penal.

#### **3.1.La finalidad del proceso común.**

En ese sentido se toma lo reseñado por los investigadores procesalistas Rodríguez, Ugaz, Gamero y Schönbohm (2012) quienes en su trabajo titulado *Manual de la investigación preparatoria del proceso penal común*, en el cual sobre el modelo procesal que se instaura en el Perú, indican que: “ (...) tiene como finalidad dejar de lado las prácticas restrictivas de derechos que caen en la arbitrariedad, así como el formalismo extremo, colocando a cada sujeto procesal en su función constitucionalmente establecida”. (p. 14) (Rodríguez Hurtado, Ugaz Zegarra, Gamero Calero, & Schönbohm, 2012)

Como se puede apreciar la principal característica es el garantismo que se supone debe asegurarse con el desarrollo de la actividad procesal, así en lo que corresponde al nuevo modelo procesal, en lo que se refiere al proceso común se advierten diversas condiciones y circunstancias, así como elementos que permiten asegurar dichas garantías, entre las cuales se puede ubicar a la terminación anticipada.

Esta determinación se la puede ubicar en lo señalado por Salas (2011) quien en su artículo jurídico titulado *La eficacia del proceso penal acusatorio en el Perú*, en el cual sobre el proceso común indica que: “(...) cuenta con tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Pero, el CPP-2004 también establece

procesos especiales, como son: el proceso inmediato, el proceso por delitos de función, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas”. (p. 273)

El derecho penal como parte del ordenamiento jurídico comprendido en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho adquiere la característica de garantista, por lo mismo que su estructura está compuesta por reglas que adquieren dicha cualidad a través de la incorporación de principios generales que sirven de directrices del esquema sustantivo; luego para el aspecto procesal que está encaminado a la concretización del derecho penal también se incorporan ciertos principios que guían el carácter ejecutivo, así es como se construye este nuevo esquema del proceso penal, dotado de garantías.

Dentro del grupo de tales directrices procesales se puede ubicar dos que resultan de suma importancia para esta investigación, es decir la garantía de economía y celeridad procesal, características que tienen por finalidad la eliminación del aspecto dilatorio innecesario y los efectos que ello pudiera producir, en ese sentido resulta interesante poder desarrollar cada uno de estos principios que están contenidos en la estructura del proceso penal peruano.

Es importante tener en cuenta que la estructura procesal esta compuesta que asegura el cumplimiento de las garantías que se pretenden analizar, lo cual se deriva de una garantía principal entendida como el control estructural de la investigación a fin de que se desarrolle de acuerdo a los parámetros establecidos en el ordenamiento procesal, eso es el debido proceso, para cuyo entendimiento se hace mención a la postura del Tribunal Constitucional respecto a tal garantía.

El inciso 3) del artículo 139° de la Constitución establece como principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y

la tutela jurisdiccional. El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deban aplicarse a todos los casos y procedimientos existentes en el Derecho (Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, 2003).

De acuerdo a lo reseñado por los intérpretes de la norma, respecto a la finalidad de control del debido proceso se comprende como una garantía del cumplimiento de otras garantías, es decir se refuerza el carácter proteccionista del proceso penal a través del aseguramiento de las garantías que contiene; siendo así la perspectiva del debido proceso respecto al cumplimiento de las garantías que señala, incorpora pues a las que se pretende estudiar como son la Economía y Celeridad procesal.

Señalar esta característica de la estructura procesal es hablar no sólo de las garantías que se contemplan en la regla, es importante también tener en cuenta la peculiaridad de la realidad del proceso, es decir las condiciones comunes en las que se desarrolla, así pues existen aspectos que se producen como efecto de la misma ejecución, relacionada incluso con la cantidad de casos que se atienden en el día a día de la actividad investigadora que tiene el sistema judicial.

Por lo mismo que se ha de tener en cuenta la característica de la realidad del proceso en sí, en ese sentido resulta de importancia considerar lo mencionado por Pico I. Junoy recogida por el español Gozaíni (2010), quien en su artículo científico titulado: *El plazo razonable en los procesos constitucionales*, en el cual señala:

Pico I Junoy dice que los criterios para encontrar dilaciones indebidas, dependen de las circunstancias siguientes: el exceso de trabajo del órgano jurisdiccional; la defectuosa organización, personal y material, de los Tribunales; el comportamiento de la autoridad judicial; la conducta

procesal de la parte; la complejidad del asunto; y la duración media de los procesos del mismo tipo (Gozaíni, 2010).

La descripción de se recoge en la cita anterior describe una característica del proceso relacionada con la demora, esta circunstancia es la que se encuentra como elemento común entre los principios que se pretende desarrollar con el fin de enriquecer el argumento de la necesidad de recoger la figura de la terminación anticipada adelantándose a la etapa señalada en el esquema procesal, lo cual es bastante lógico puesto que ello permitiría la eliminación de la presencia de las características descritas como elementos de dilación procesal.

Todo ello en razón de que los principios han sido incorporados para generar seguridad jurídica en el proceso de investigación penal, así la garantía de su cumplimiento asegura el desarrollo adecuado bajo el parámetro de debido proceso, sin demoras, retrasos innecesarios; todo ello relaciona a los principios de economía y celeridad procesal, que se incorporan como garantías en el proceso penal.

### **3.2. El principio de economía en el proceso penal**

El punto de partida para la comprensión de este principio es la determinación de su concepto como tal, esto es lo que la doctrina ha señalado como definición, así se ha de tener en consideración lo plasmado por García Toma ( 2003), quien en su artículo jurídico titulado *Valores, principios, fines e Interpretación Constitucional*, en el cual señala sobre los principios que: “En el discurso teórico se les califica como decisiones fundamentales con valor constituyente, rigor maestro del sistema constitucional, nociones básicas del orden político jurídico, núcleo central del sistema constitucional, etc.”. (pág. 193)

De acuerdo a lo señalado por García, el carácter constitucional que da origen a los principios juega un papel preponderante y por ello es que la doctrina les otorga descripciones trascendentales que detallan su importancia, lo cual debería entenderse o

traducirse en una cuestión imperativa a fin de que alcancen su efecto de control al momento del desarrollo de la investigación; esto es, que la finalidad de control debería tener la característica de rigor, así la necesidad de que se cumpla don dicho principio, es decir la garantía procesal, requerirá de que tenga un efecto amplio.

Esta amplitud se constituye en el fundamento para la indicación sugerente de que la figura de terminación anticipada sea admisible en etapas previas a la señalada por el ordenamiento, con la finalidad de propiciar esta garantía procesal, o sea el cumplimiento del principio de economía procesal bajo la concepción de que se trata de una regla constitucional, cuyo carácter convierte en exigible la garantía de esta directriz.

Luego de la descripción general del principio desde la perspectiva constitucional, interesa describir sus cualidades internas, esto es la finalidad específica que tiene como regla de orden constitucional, para lo cual de toma como primer punto la crítica al proceso penal reformado en Europa y América Latina, hecha por el investigador Moreno Catena(2009) quien en su artículo jurídico titulado *El marco de las reformas del proceso penal en Europa y en América Latina*, al describir los efectos de un principio señala:

(...) se deben evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad; obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de readaptación, a cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad; estimular la pronta reparación el daño y finalmente, evitar juicios orales innecesarios, atendiendo a razones de economía procesal. (pág. 233)

Como se puede observar de la cita, el autor describe una cualidad del proceso penal en la que participan los principios y precisamente en la ejecución de ellos, se aprecian finalidades lo cual relaciona con la innecesaria intervención del derecho penal respecto de penas leves, es decir que se puede entender este tipo de acción como una

sobre criminalización de ciertos actos, por lo mismo que para el caso estudiado acuden las medidas especiales que permiten alivianar la situación del imputado en razón tal vez de un acuerdo o reparación del daño, esta circunstancia permite terminar anticipadamente el proceso, entonces se encuentra la relación de la tendencia descrita inicialmente muy cercana a la propuesta de esta investigación.

La peculiaridad de evitar la intervención del derecho penal en penas muy cortas, lo relaciona además con varios efectos que determinan la resocialización del delincuente que se entiende ha de ser sometido con el fin de reincorporarse a la sociedad, pero el punto más interesante que permite verificar la viabilidad de esta propuesta es el hecho de que se menciona como finalidad del principio el hecho de evitar la llegada a juicios orales por cuestiones que se pueden reparar en el camino del proceso.

Que mejor opción entonces de atender a esta postura, que la de sugerir que la terminación anticipada tenga cabida o posibilidad de ser admitida en niveles previos a los señalados en el ordenamiento procesal peruano, así la forma en que se atienda la constitucionalidad del principio, será adecuada, ello con el fin de garantizar su cumplimiento por mandato superior, es decir cristalizar el garantismo penal que se supone debe incorporar el proceso en sí.

Entonces la idea de ejecución de dicho principio de economía procesal en el ámbito penal se relaciona con las dilaciones que se pudieran producir en el desarrollo de la investigación, así pues, dentro de su ejecución se pueden encontrar diversos factores que ponen lento el decurso de los actos que es precisamente de lo que se ocupa el principio de economía, ello se puede entender como actos de dilación, para cuyo entendimiento se cita a De Bernadis (1995) quien en su obra que lleva por título *La Garantía Procesal del Debido Proceso*, describe:

“La dilación puede producirse por inexecución por parte del órgano judicial de las obligaciones que están bajo su responsabilidad. La inercia se puede producir en el desinterés de actuar según la obligación de tutelar el derecho en un proceso rápido y expedito”. (pág. 547)

Bajo ese criterio se puede advertir que siendo la intención del principio evitar que se produzcan demoras innecesarias, debe entenderse que estas acciones que producen dilación están siempre a cargo de la forma de accionar de parte de la judicatura, en razón de diversos factores claro está que no siempre obedecen a las voluntades, es decir tienen un carácter objetivo.

Es en ese sentido que se ha de analizar el efecto de las dilaciones, primero teniendo en cuenta a que aspecto obedece el retraso, desde luego las cuestiones subjetivas serán difícilmente identificables por lo cual sólo se podrán controlar los aspectos objetivos de la demora, por lo mismo que la aplicación del principio de economía procesal estará sometida a la participación adecuada y oportuna de los actos procesales que el esquema procesal incorpora, atendiendo a la idea de minimizar actos, tiempo entre ellos y los efectos que se pudiera lograr.

Por ello mismo es que la propuesta se inclina hacia la comprensión de que la admisión de la terminación anticipada en una etapa anterior a la contemplada en el esquema procesal penal, es apropiada ya que se condice con el efecto que se espera de la aplicación del principio de economía procesal, logrando con ello como ya se dijo anteriormente, evitar que un proceso llegue innecesariamente al nivel de juicio oral.

### **3.3.El principio de celeridad en el proceso penal**

Vista ya la importancia que merece la participación del principio procesal de economía en el proceso penal, es correcto enfocarse en el examen de otro de los principios de vital importancia en el desarrollo de la investigación, así se encuentra al de celeridad

procesal, que sin duda alguna tiene una estrecha relación con el de economía; siendo así este último es una puntualización referida al cumplimiento de los plazos que están señalados en el esquema procesal, por lo mismo que se hace necesaria su comprensión con el fin de verificar si es que se puede argumentar con él, la permisibilidad de aplicar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta la relación que existe entre el principio de celeridad con el debido proceso, así lo menciona el investigador Canelo Rabanal (2006) en su artículo científico titulado *La celeridad procesal, nuevos desafíos*, en el cual señala:

La celeridad procesal no es un principio abstracto: muy por el contrario, es el alma del servicio de justicia. Esta claro que la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través del proceso en el más breve plazo (...). (pág. 3)

Resulta propio indicar que el decurso de un proceso bajo los parámetros que el esquema procesal señala trae consigo la consecuencia de justicia oportuna y eficaz, por lo mismo que se puede reconocer la relación con el debido proceso que advierte el investigador citado, en efecto se entiende que la expectativa del justiciable siempre será el alcanzar el reconocimiento de sus derechos, que para el caso del derecho penal lo que se procura es el reconocimiento de la responsabilidad penal del imputado para así aplicar el escarmiento necesario.

Sin embargo la principal razón de un desarrollo célere y adecuado a los parámetros conforme lo indica el principio de celeridad y el debido proceso respectivamente, es el hecho de alcanzar justicia, y pues se utiliza el conocido razonamiento de que justicia que

tarda no es justicia, que para el caso del derecho penal se han creado medios alternativos que si bien es cierto quiebran el esquema, evita que el paso del tiempo genere más difícil la tarea de reparar el daño que esa viene siendo la finalidad.

Entonces tal cual se hubo indicado líneas arriba, interesa saber si es que la aplicación del principio de celeridad es de utilidad como argumento para señalar la admisibilidad del proceso especial de terminación anticipada durante la etapa intermedia; por lo mismo que según lo recogido, se puede apreciar que no es una cuestión argumentativa directa, puesto que el control de plazos si es cierto que procura un desarrollo más rápido, pero dentro del esquema normal, mas para el caso de la terminación anticipada, no tiene una exacta influencia, puesto que no se refiere a la forma en que se evita llegar al juicio oral.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la perspectiva penal en torno al principio de celeridad procesal que se ha tomado como base en el nuevo proceso penal en la estructura del proceso común, se entiende que se procuran espacios de tiempo pequeños, además de la presencia de institutos procesales que tienen por común característica la celeridad, como es el caso que pone de ejemplo el de la acusación directa y los procesos especiales como son el proceso inmediato y la terminación anticipada que es el que ocupa este espacio de la investigación en su relación con la celeridad procesal (Villavicencio Rios, 2010, pág. 93)

Tal apreciación permite verificar el nivel de importancia que atiende a esta figura, teniendo en cuenta el hecho de existe una relación entre el tiempo de duración, los plazos que se proyectan acortados en tanto se produzca la intervención de la terminación anticipada que es el caso estudiado, sin que se perjudique el sentido del proceso penal, alcanzar justicia en el menor tiempo posible y con el menor numero de actuaciones, ello es lo que engloba el interés para realizar la propuesta que permitirá la admisibilidad de

este proceso especial con el fin de evitar tener que atravesar etapas previas al juzgamiento de manera innecesaria, colaborando con ello a una justicia pronta sin dilaciones y dotada de las garantías que inspira el derecho penal y procesal penal.

## **CAPITULO IV**

### **ANÁLISIS Y RESULTADOS**

#### **Análisis de la posibilidad de incorporara la admisión del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia en relación a las garantías del proceso común**

Para el desarrollo de esta sección se ha tenido en consideración la meta plasmada a través del último objetivo específico que se comporta como el indicador del trabajo de campo o el análisis de la realidad, para lo cual se proyectó desde un inicio la observación de la acción jurisdiccional que se ejecuta en los juzgados penales sobre el sentido de la aplicación de la terminación anticipada, a fin de establecer un criterio sólido sobre la limitación que genera la regla tal cual se ha estructurado sólo para la investigación preparatoria.

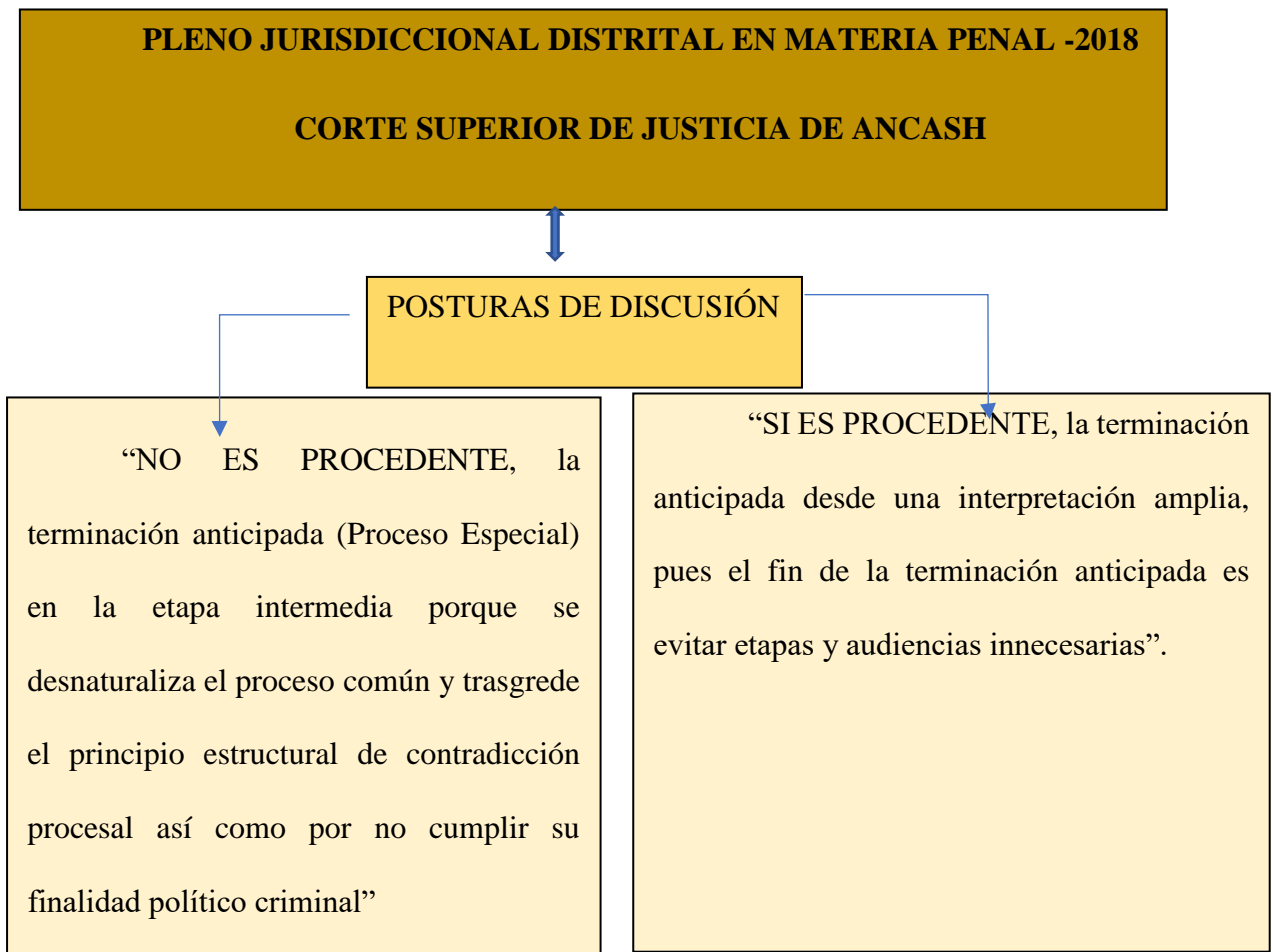
Además de ello se ha considerado el aspecto de observación relacionado con la verificación de la postura que adoptan los trabajadores del poder judicial que atienden casos procesales en el ámbito penal, en los que se requiere la aplicación de la terminación anticipada, así pues su respuesta será evaluada en función a la coincidencia con la estructura de propuesta de esta investigación según el enfoque orientado a la incorporación de la posibilidad de incorporar la terminación anticipada en la etapa intermedia hasta antes del requerimiento de juicio.

#### **4.1.Análisis de los resultados:**

Según lo indicado líneas arriba en cuanto a la observación de la realidad, interesa primero tener en cuenta la forma en que se atiende el caso de la aplicación de la terminación anticipada en el proceso común, por lo cual se ha recurrido a la evaluación de las correspondientes resoluciones.

#### 4.1.1. Resultados del análisis jurisdiccional.

En lo que corresponde a este tipo de análisis, se ha concebido la necesidad de observar el comportamiento de la jurisdiccionalidad, tomando en consideración como primer punto el hecho de que a nivel de acuerdos se ha constituido en el año 2018 en la Corte Superior de Justicia de Ancash, un Pleno jurisdiccional distrital en materia penal-2018, en cuyo contenido se ha tratado el tema segundo, respecto a la necesidad de reevaluar la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del Código Procesal Penal, en el cual se puede apreciar una discusión sobre dos posturas bien planteadas y se muestran a continuación.



**PLENO JURISDICCIONAL DISTRITAL EN MATERIA PENAL -2018**

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH**



**CONCLUSIÓN PLENARIA**

Por mayoría

4 votos a favor

1 en contra



**“Si es procedente, desde una interpretación amplia, pues el fin de la terminación anticipada es evitar etapas y audiencias innecesarias; además deben tenerse en cuenta la carga procesal que afrontan las fiscalías y juzgados en todo el país, así como las circunstancias especiales presentadas en la etapa intermedia como es el caso del reo ausente, de la acusación directa o de la integración o subsanación de la acusación fiscal”**

Conforme se puede apreciar el sentido que adopta la postura del acuerdo distrital de Ancash, se desprende de una interpretación que se corresponde con las funciones que debe cumplir la terminación anticipada en el proceso penal, lo que resulta de vital

importancia reconocer dentro de esta postura es la presencia de dos cuestiones importante que tienen coincidencia con el tema que se esta planteando en esta investigación.

En primer lugar la condición de la economía procesal que ha sido usada para la verificación de la utilidad, que se consiga evitar etapas que siendo esa la finalidad de la terminación anticipada, el hecho de que se consolide aún en la etapa intermedia tendrá ese efecto de evitación de momentos que conlleva incluso a la disminución de la carga procesal, puesto que se eliminan los procesos que ocuparían un espacio y tiempo para el sistema judicial, factor que es considerado de mucho valor.

#### **4.1.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.**

En lo que corresponde a la observación de la opinión de los operadores jurídicos, se ha proyectado sobre un grupo de 50 personas entre las cuales se incorporan a jueces, fiscales y abogados litigantes en el área del derecho penal, a tal fin se ha construido una encuesta que se encuentra plasmada en los anexos de la tesis y que se configuró en razón de la estructura de las variables, así en ese orden se han creado afirmaciones orientadas a la definición, crítica y propuesta inspiradas en ellas, sobre las cuales los operadores indican su nivel de coincidencia.

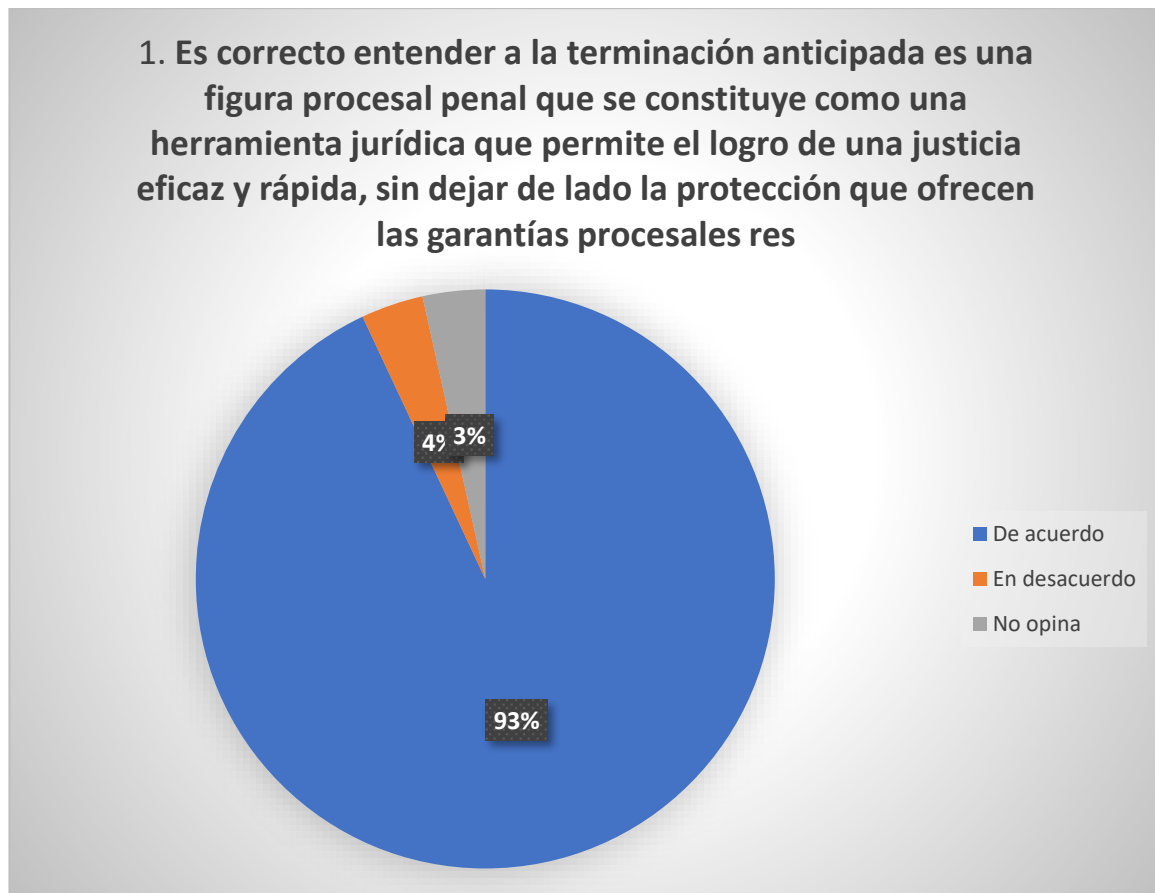
Este resultado es un elemento importante toda vez que se pretende asumir el sentido de la propuesta de investigación primero y la recomendación que se pretende sugerir como resultado de toda la observación de la realidad sobre el tema de la aplicación de la figura de terminación anticipada ampliando su ámbito hasta la etapa intermedia sólo con la limitante de que se produzca antes del requerimiento de juicio oral; todo este resultado se plasma a continuación debidamente tabulado en tablas y gráficos porcentuales.

*Tabla 1: Tabulación de los resultados de la afirmación N° 1 de la encuesta aplicada a los expertos en el Poder Judicial de la ciudad de Chiclayo..*

<b>1. Es correcto entender a la terminación anticipada es una figura procesal penal que se constituye como una herramienta jurídica que permite el logro de una justicia eficaz y rápida, sin dejar de lado la protección que ofrecen las garantías procesales respecto de los imputados en la investigación penal.</b>	
<b>Opción</b>	<b>Respuestas</b>
a. De acuerdo	<b>46</b>
b. En desacuerdo	<b>02</b>
c. No opina	<b>02</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

Conforme se aprecia de la tabal diseñada, respecto a la respuesta sobre la afirmación Es correcto entender a la terminación anticipada es una figura procesal penal que se constituye como una herramienta jurídica que permite el logro de una justicia eficaz y rápida, sin dejar de lado la protección que ofrecen las garantías procesales respecto de los imputados en la investigación penal; encontrando un resultado positivo para el nivel de informantes que se encuentran de acuerdo pues llegan a 46, luego respecto a la condición que se que se encuentran en contra de la postura sólo son 2, así como también alcanzó el mismo nivel los que se abstuvieron de opinar.

*Ilustración 1; descripción gráfica de la tabulación obtenida del resultado de la afirmación 1 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*



*Tabla 2: Tabulación de los resultados obtenidos de la afirmación 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo*

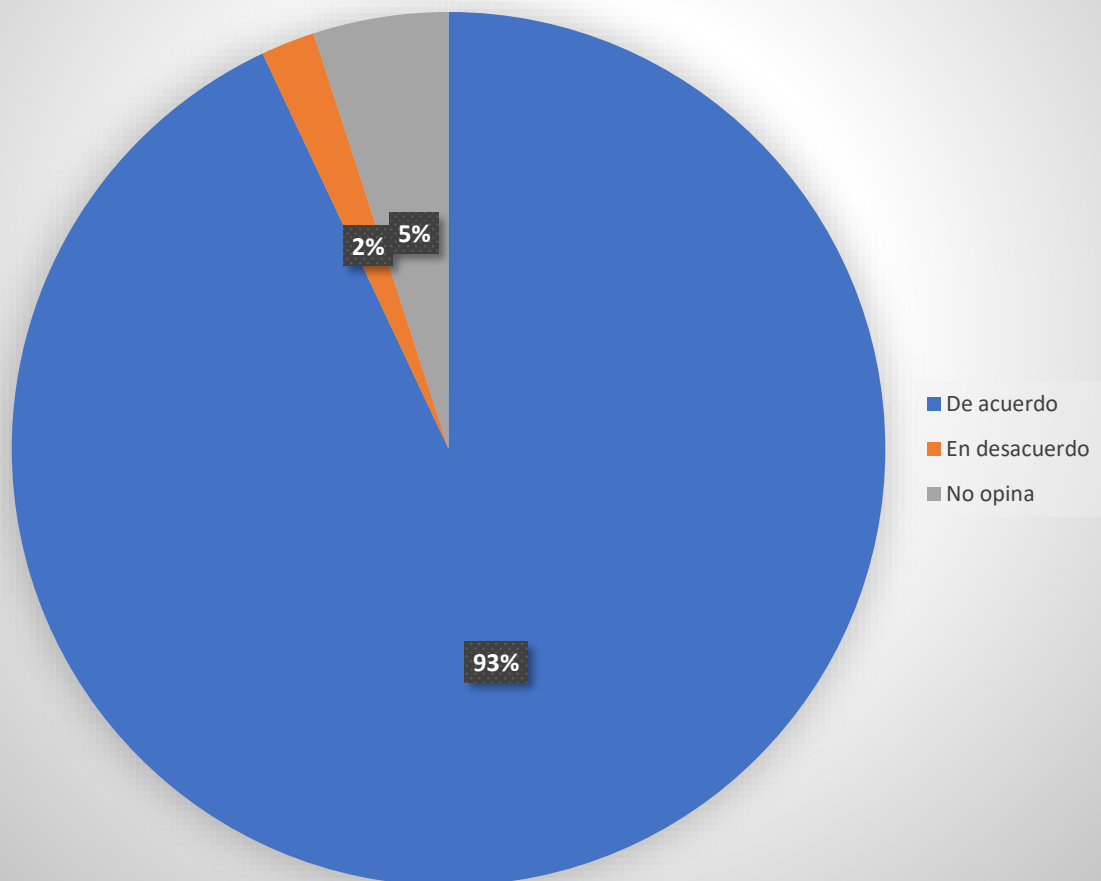
**2. El proceso de terminación anticipada es una figura útil, pero presenta limitaciones generadas por el mismo esquema procesal penal, las mismas que no permiten su aplicación en otras etapas del proceso penal generando indefensión para el imputado o cuando menos la cancelación de la posibilidad de un arreglo.**

Opción	Respuestas
a. De acuerdo	<b>46</b>
b. En desacuerdo	<b>01</b>
c. No opina	<b>03</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

Según la tabulación realizada se puede apreciar el resultado respecto a la afirmación: El proceso de terminación anticipada es una figura útil, pero presenta limitaciones generadas por el mismo esquema procesal penal, las mismas que no permiten su aplicación en otras etapas del proceso penal generando indefensión para el imputado o cuando menos la cancelación de la posibilidad de un arreglo; resultando para la opción de aquellos que se encuentran de acuerdo la cifra de 46, luego para los que no lo estaban sólo 01 aplicó y finalmente sólo 3 se abstuvieron de responder.

*Ilustración 2: Descripción gráfica de la tabulación obtenida en función de los resultados de la afirmación 2 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*

**2. El proceso de terminación anticipada es una figura útil, pero presenta limitaciones generadas por el mismo esquema procesal penal, las mismas que no permiten su aplicación en otras etapas del proceso penal generando indefensión para el imputado o cuand**

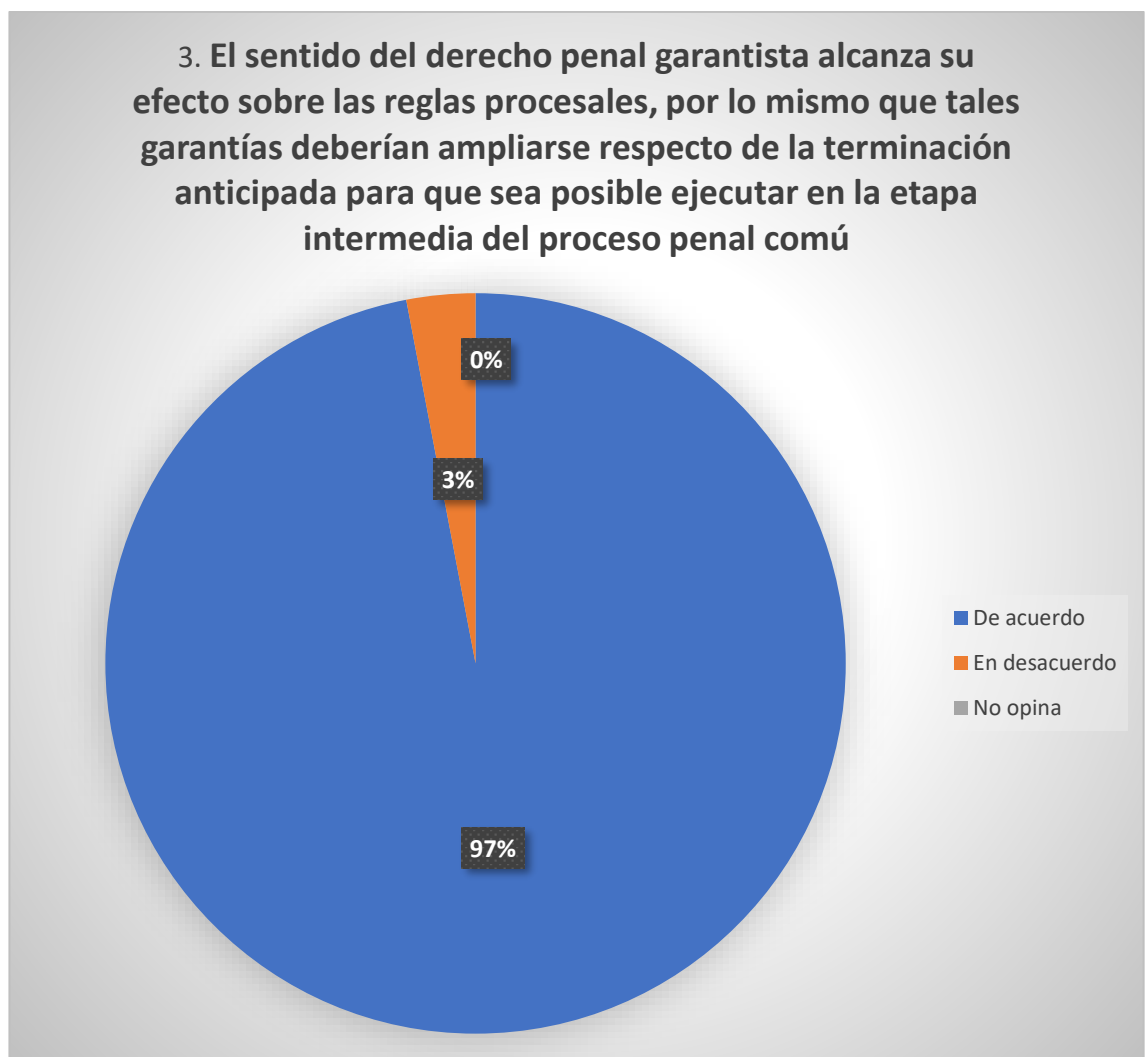


*Tabla 3: Tabulación de los resultados obtenidos respecto de la afirmación 3 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo*

<p><b>3.</b> El sentido del derecho penal garantista alcanza su efecto sobre las reglas procesales, por lo mismo que tales garantías deberían ampliarse respecto de la terminación anticipada para que sea posible ejecutar en la etapa intermedia del proceso penal común.</p>	
Opción	Respuestas
a. De acuerdo	<b>48</b>
b. En desacuerdo	<b>02</b>
c. No opina	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

En función a la tabulación mostrada se puede apreciar los resultados respecto a la afirmación: El sentido del derecho penal garantista alcanza su efecto sobre las reglas procesales, por lo mismo que tales garantías deberían ampliarse respecto de la terminación anticipada para que sea posible ejecutar en la etapa intermedia del proceso penal común; alcanzando un resultado positivo para los que están conformes con la opinión llegando a la cifra de 48 respuestas, mientras que para los que no lo están sólo 02 respuestas.

*Ilustración 3: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados obtenidos de la afirmación 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*

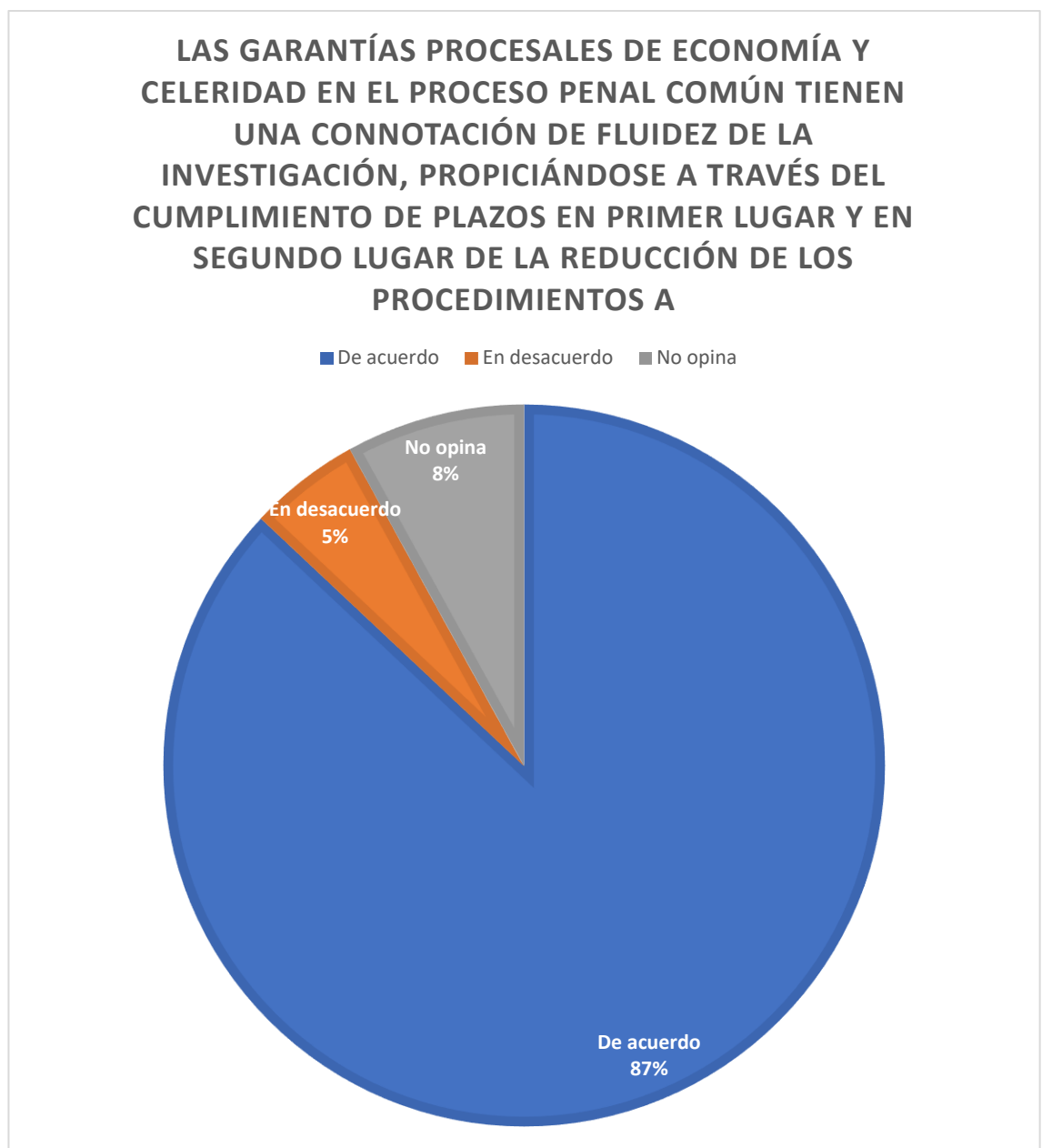


*Tabla 4: Tabulación de los resultados obtenidos en la afirmación 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*

1.	Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común tienen una connotación de fluidez de la investigación, propiciándose a través del cumplimiento de plazos en primer lugar y en segundo lugar de la reducción de los procedimientos a fin de economizar tiempo y esfuerzo del aparato judicial y gasto de las partes.
<hr/>	
	<b>Opciones</b>
	<b>Respuestas</b>
a.	De acuerdo
	<b>42</b>
b.	En desacuerdo
	<b>03</b>
c.	No opina
	<b>05</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

Según la tabulación mostrada, se han obtenido resultados respecto a la afirmación: Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común tienen una connotación de fluidez de la investigación, propiciándose a través del cumplimiento de plazos en primer lugar y en segundo lugar de la reducción de los procedimientos a fin de economizar tiempo y esfuerzo del aparato judicial y gasto de las partes; sobre la cual se ha verificado un resultado de 42 respuestas para quienes estaban en conformidad con lo plateado mientras que solo 03 indicaron no concordar mientras que se aprecia la abstención de 3.

*Ilustración 4: Descripción gráfica de la tabulación respecto a la afirmación 4 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo.*

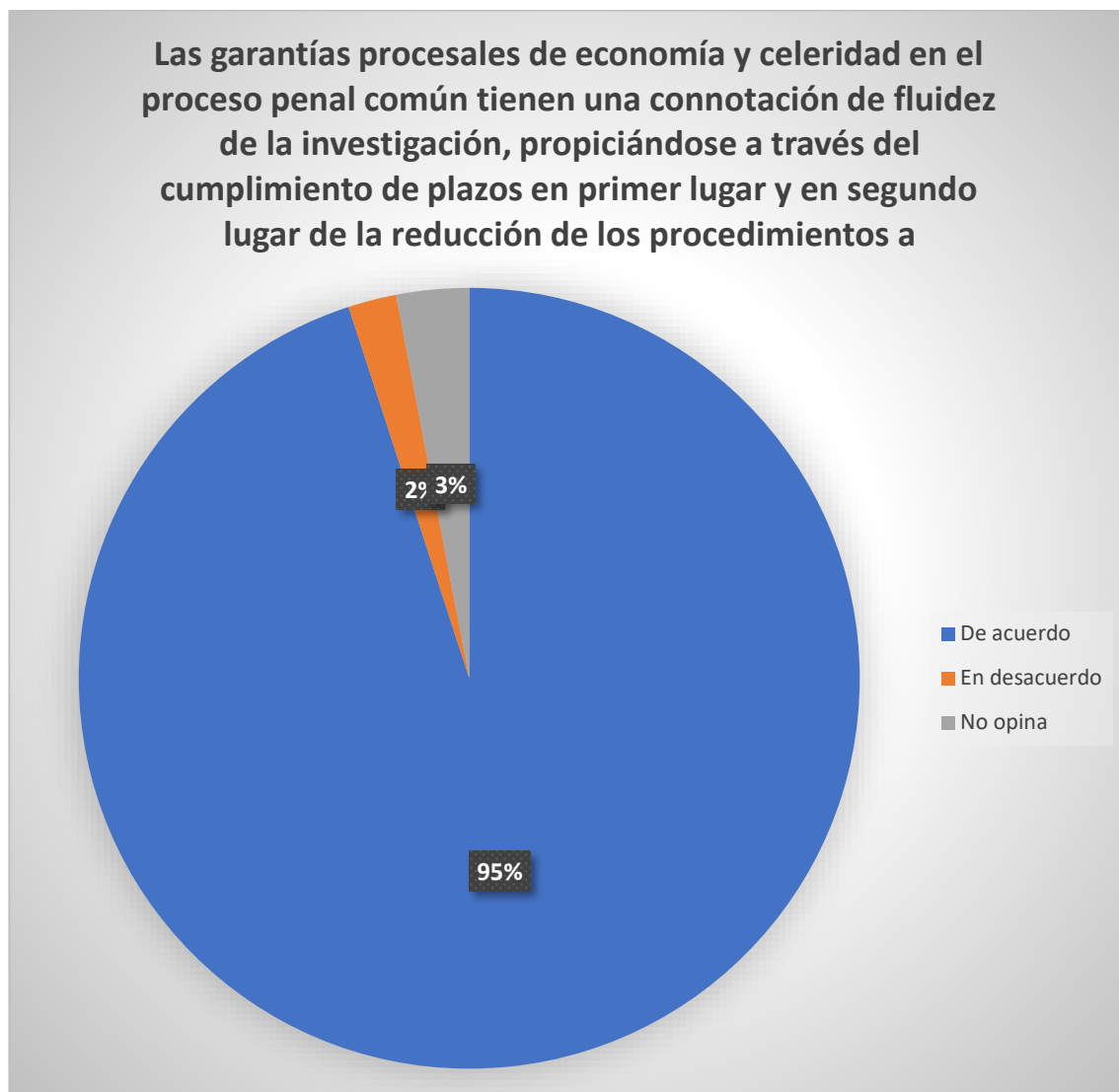


*Tabla 5: Tabulación del resultado obtenido respecto a la afirmación 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo.*

<p><b>5. Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común tienen una connotación de fluidez de la investigación, propiciándose a través del cumplimiento de plazos en primer lugar y en segundo lugar de la reducción de los procedimientos a fin de economizar tiempo y esfuerzo del aparato judicial y gasto de las partes.</b></p>	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	<b>47</b>
b. En desacuerdo	<b>01</b>
c. No opina	<b>02</b>
<b>Total</b>	<b>50</b>

Según lo que se advierte en la tabulación respecto a los resultados de la afirmación: Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común tienen una connotación de fluidez de la investigación, propiciándose a través del cumplimiento de plazos en primer lugar y en segundo lugar de la reducción de los procedimientos a fin de economizar tiempo y esfuerzo del aparato judicial y gasto de las partes; obteniéndose un resultado que muestra la opción de conformidad con la postura alcanzando la cantidad de 47 respuestas, mientras que solo 1 informante opina de manera disconforme, verificándose la abstención de 2 operadores.

*Ilustración 5: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados respecto a la afirmación 5 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*



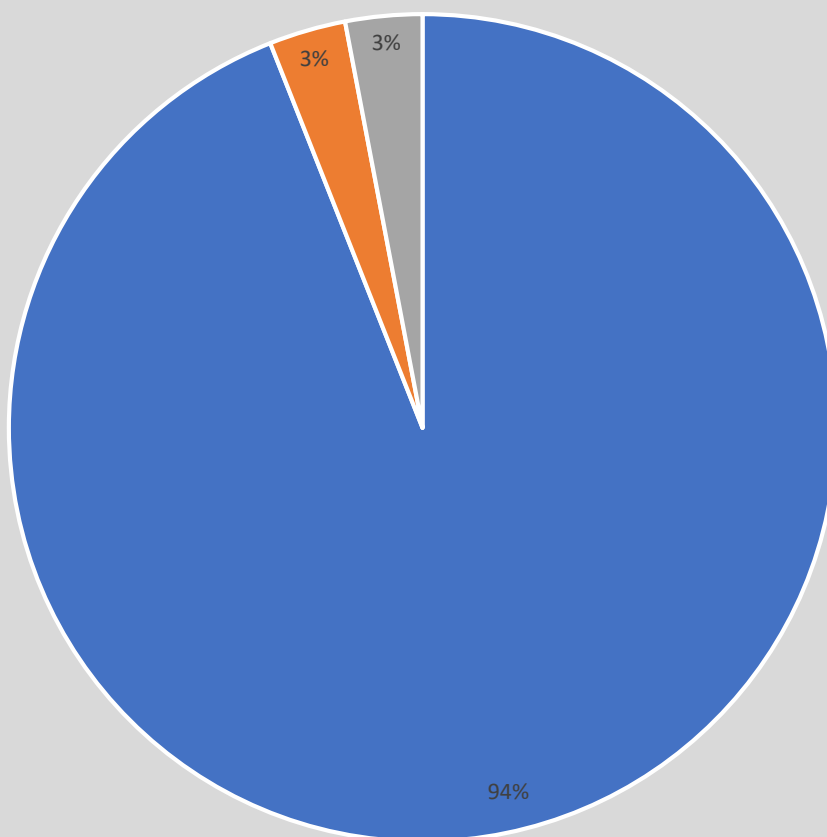
*Tabla 6: Tabulación de los resultados obtenidos respecto a la afirmación 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo.*

<p>6. No se aprecia una coincidencia entre el sentido garantista que acoge la terminación anticipada y su aplicación en el proceso penal, en tanto que existe una limitación de ejecución en la etapa intermedia, generando ausencia de tales garantías y demora innecesaria en el proceso y en consecuencia afectación a los principios procesales de celeridad y economía procesal.</p>	
Opciones	Respuestas
a. De acuerdo	46
b. En desacuerdo	02
c. No opina	02
<b>Total</b>	<b>50</b>

Conforme se aprecia de la tabulación de los resultados obtenidos sobre la afirmación: No se aprecia una coincidencia entre el sentido garantista que acoge la terminación anticipada y su aplicación en el proceso penal, en tanto que existe una limitación de ejecución en la etapa intermedia, generando ausencia de tales garantías y demora innecesaria en el proceso y en consecuencia afectación a los principios procesales de celeridad y economía procesal; se ha obtenido un resultado de 46 respuestas para la inclinación a favor de la postura planteada, mientras que solamente 2 de los encuestados han indicado no estar de acuerdo, en tanto que se muestran 2 abstenciones.

*Ilustración 6: Descripción gráfica de la tabulación de los resultados respecto a la afirmación 6 de la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la ciudad de Chiclayo,*

No se aprecia una coincidencia entre el sentido garantista que acoge la terminación anticipada y su aplicación en el proceso penal, en tanto que existe una limitación de ejecución en la etapa intermedia, generando ausencia de tales garantías y demora inne



## **CAPÍTULO V**

### **CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS**

Es importante la construcción de esta parte de la investigación en razón de que se incorporan los puntos de crítica contruidos en función de los resultados tanto teóricos como de observación de la realidad, así en conjunto se organiza la discusión primero sobre cada uno de los objetivos que son las metas de la tesis que incorporaron material teórico, el mismo que se discute con la finalidad de asumir una postura personal sobre el sentido de la investigación; seguidamente con dichos resultados se ha proyectado la validación de las variables que sirvieron inicialmente de base para la elaboración de los objetivos como metas, con lo cual se construye una postura final que es comparada con la hipótesis inicial a fin de obtener la contrastación propiamente dicha.

#### **5.1. Discusión de resultados**

Como ya se hubo señalado el sentido de incorporar la discusión de los resultados es con la finalidad de verificar el contenido teórico y dogmático que se ha incorporado en la tesis, a fin de que con la construcción crítica sobre ello pueda alcanzarse la certeza o la seguridad de que resulta en efecto viable desde el punto de vista teórico, la incorporación de la terminación anticipada en una etapa en la que según la regla no se podría ejecutar, limitando el derecho de las partes.

### **5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar la estructura del proceso especial de terminación anticipada para colegir con la etapa intermedia desde una perspectiva constitucional y los fines del proceso”**

El inicio de la discusión que mana del desarrollo del capítulo que corresponde a este objetivo específico, ha de encaminarse por la senda de la percepción del concepto de terminación anticipada como proceso especial incorporado en la estructura procesal penal, teniendo en cuenta el momento en que se ha de actuar a fin de reconocer si resulta ser el más idóneo para surtir los efectos apropiados, debido a ello es que se establecen ciertos cuestionamientos a continuación.

¿Cuál es la concepción más adecuada para entender la terminación anticipada como proceso especial?

De conformidad con lo señalado por gran parte de la doctrina, se ha de entender a la terminación anticipada como aquella parte del proceso que a manera de posibilidad para que el sentido del mismo sea alterado o interrumpido, entendida como una suerte de abreviación de tipo procesal, lo cual ha de tener un origen convencional relacionado con los derechos humanos de los cuales manan los principios como reglas del derecho interno, siendo así su cumplimiento se torna de amplia exigibilidad.

¿Cuál es el momento procesal en el que se puede admitir la terminación anticipada en el ordenamiento penal peruano?

El proceso de terminación anticipada puede instarse desde la Formulación de la Investigación Preparatoria, pero hasta antes de formulada la acusación por el fiscal.

Algunos distritos judiciales consideran el proceso especial que analizamos como un criterio de oportunidad, y la aplican después de haberse corrido traslado la acusación escrita.

Ante ello y por las metas de nuestra investigación debemos preguntarnos ¿La terminación anticipada puede ser considerada como un criterio de oportunidad?

Al respecto, en todo el CPP no se hace un mayor análisis del denominado criterio de oportunidad, criterio que si es usado en el Código Procesal Penal para Iberoamérica, en donde se considera al criterio de oportunidad, como un símil de lo que nosotros conocemos principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios; ante ello podríamos señalar que la terminación anticipada no puede considerarse como un criterio de oportunidad.

¿Existe alguna razón objetiva para no lograr los fines del proceso penal común en la etapa intermedia y tener que esperar hasta juicio oral para ello?

Reiteramos que el fin inmediato o llamado general del proceso penal común es la *“represión del hecho punible mediante la imposición de una pena”*. (Córdova, 2019, p. 28)

Entonces, si el agraviado busca una sanción o pena para el agente, no se aprecia una razón plausible para que no se pueda emitir una sentencia en etapa intermedia, más que un simple formalismo, más aún cuando no se ha oralizado el requerimiento acusatorio, que es donde se realiza el verdadero control formal de la acusación. Asimismo, si es posible aplicarla en etapa de investigación preparatoria, con mayor razón podría darse en la etapa intermedia donde existen mayores elementos de convicción que permitan pasar el filtro de legalidad para una sentencia anticipada.

Asimismo, Si el actual proceso penal común a comparación con el Código de Procedimientos Penales, se caracteriza por los plazos cortos, lograr una sentencia en el menor plazo posible, sería contrario al principio de celeridad y economía procesal que lo

caracteriza el tener que esperar hasta una etapa de juicio oral para aceptar los cargos y dictarse una sentencia, sería innecesario.

Debiéndose entender que no siempre por motivos de elección del imputado es que no se llegó a una terminación anticipada en etapa de investigación preparatoria, quizá no se propuso por una defensa ineficaz, o conforme de forma acertada lo ha señalado el Acuerdo Jurisdiccional Distrital en Materia Penal del año 2018, por haberse dado una acusación directa, reo ausente, acusación directa, integración de la acusación.

#### **TOMA DE POSTURA:**

De todo lo antes descrito se puede reconocer que efectivamente el proceso de terminación anticipada, al ser un proceso de simplificación procesal basado en el consenso, puede ser aplicado tanto en la Investigación Preparatoria como etapa intermedia, siempre que aún no se haya oralizado la acusación fiscal, pues aún no comienza la etapa del verdadero filtro procesal que plasmada en las audiencias.

#### **5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Describir las garantías procesales de economía y celeridad procesal en el proceso penal común”.**

De acuerdo al contenido que se ha plasmado en el desarrollo de este objetivo específico, se ha podido apreciar que la discusión debe hacerse sobre el efecto que produce la aplicación de estos principios en el proceso penal común peruano, por lo mismo que la primer interrogante debe enfocarse sobre el principio de economía procesal, así pues debe cuestionarse ¿Qué tan efectiva es la aplicación del principio de economía y celeridad en el proceso común?

La respuesta de tal cuestionamiento ha de orientarse al sentido crítico, así pues no resulta de difícil verificación el hecho de que la estructura del proceso penal en sí, otorga ciertas condiciones para que este principio se aplique en el marco del garantismo que

adjetiva al proceso común, así pues plasmar esto en la realidad no siempre ha resultado lo suficientemente eficaz.

Esto es que la acción de estos principios se ve ralentizados en razón de las dificultades, en primer lugar, que se producen a razón de las circunstancias de medios con los que cuenta el sistema de justicia penal, esto es el nivel de capacidad de investigación con el que cuenta el Ministerio Público, en torno a cuestión infraestructura o capacidad del personal humano; en segundo lugar se puede encontrar como principal traba a la carga procesal que se manifiesta en casi todo el sistema penal, lo cual dificulta el ejercicio adecuado de las labores, trayendo consigo la necesidad de ejecutar más actos de los que se han establecido en el esquema procesal, afectando este principio de economía.

¿Cómo se relaciona esta afectación del principio de economía procesal con la ejecución del proceso de terminación anticipada?

Teniendo en cuenta el sentido del proceso de terminación anticipada, dado que busca en esencia lograr que la justicia sea aplicada de una forma más eficaz y rápida, esto es la aplicación de la justicia en la menor cantidad de actos posibles, circunstancia que opera fundamentalmente con el corte de la secuencia de los procedimientos que estructura el ordenamiento procesal penal, esto es evitar etapas procesales innecesarias, con todas las prerrogativas que ello implica.

Siendo así, el efecto que se supone otorga la aplicación de este proceso de terminación anticipada, podría llegar a ser mucho más eficaz si es que se genera su aplicación en lo que se conoce como la etapa intermedia, ello con la finalidad de que se eviten una mayor cantidad de etapas, atendiendo al principio de economía procesal que según lo visto en el desarrollo teórico y la crítica jurídica, no resulta ser lo suficientemente satisfactorio.

Otro aspecto que interesa a esta investigación es el hecho de revisar la acción que produce el respeto del principio de celeridad procesal, así según lo establecido en el sentido garantista del proceso penal común, la actividad debe ceñirse a los plazos establecidos, lo cual resulta criticable en razón de que el incumplimiento de ciertos plazos establecidos produce la creación de otro tipo de acciones que ralentizan la actividad de la investigación demorándola innecesariamente, esto es que la justicia ya no se aplica en la secuencia establecida y esperada.

Actualmente se establece a la etapa de investigación preparatoria y hasta antes de formularse la acusación como límite para poder interponer el proceso especial de terminación anticipada, lo cual propicia una opción para el imputado a fin de que se pueda acceder a este tipo de conclusión del proceso evitando mayor demora en el desarrollo de la investigación, lo cual incluye plazos que se han de cumplir, así mismo la no activación de recursos procesales como apelación, dado que la sentencia tiene la característica de ser consensuada; sin embargo, el hecho de que se constituya en la regla bajo esta limitación ceñida hasta la etapa de investigación preparatoria, se convierte en un problema de restricción del derecho a la defensa que debe primar como parte de la característica garantista del proceso común peruano.

Según lo visto ambas circunstancias plasmadas como ineficacia tanto de los principios de economía y celeridad procesal, tienen una relación directa con la aplicación de la terminación anticipada, tan es así que la verificación de la realidad ha permitido establecer que el nivel de la actividad procesal en una etapa superior pudo ser incluso más engorrosa por circunstancias de ineficiencia o falta de capacidad de infraestructura para poder atender de manera adecuada todos los casos judicializados.

Así en la etapa intermedia, también puede generarse la posibilidad de que el imputado acceda a la aceptación de la responsabilidad de los hechos que se investigan; siendo así la imposibilidad de que se constituya el proceso especial de terminación anticipada, estaría no sólo alterando los principios antes descritos, sino que también genera un problema de vulneración de derechos para el propio imputado, puesto que la limitación del acceso a esta figura procesal, restringe la posibilidad de terminar la agonía del decurso innecesario del proceso común.

#### TOMA DE POSTURA:

Revisada la participación e ineficacia de los principios de economía y celeridad procesal a la fecha en los procesos penales, se ha podido identificar la relación que existe entre dicha característica con el límite procesal para la aplicación del proceso especial de terminación anticipada, restringido sólo hasta la investigación preparatoria; circunstancia procesal que se advierte como una forma de debilitar dichos principios.

#### **5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la posibilidad de incorporar la admisión del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia en relación a las garantías y los fines del proceso penal”.**

De acuerdo a la forma en que se ha desarrollado la crítica sobre la aplicación de la terminación anticipada, se ha podido apreciar que la estructura legislativa que se contiene en el Código Procesal Penal, no resulta lo suficientemente eficaz para conseguir los fines para los cuales ha sido creada dicha figura; siendo esta una regla de carácter procesal se procedió al uso de la interpretación de las reglas del proceso en sí.

Por ese motivo la regla que tuvo que analizarse ha sido la misma que se contempla como límite para la admisión de la terminación anticipada, siendo así, se hubo de recurrir

a la doctrina para hacer uso de la técnica de la interpretación, asumiendo la postura de San Martín (2017) quien en su libro titulado *Derecho Procesal Peruano. Estudios*, donde señala que: “(...) las normas son interpretadas con una clara vocación aplicativa (...)”. (p. 324), de lo cual se puede apreciar la coincidencia con la postura que se adopta en esta investigación.

Lo dicho se centra en razón de la condición aplicativa se engarza con el tema de la aplicación de la norma de carácter procesal, que siendo la característica específica de la terminación anticipada, conviene para su interpretación, la revisión de las acciones y fines de la figura, que coinciden con la evitación de las fases o etapas del proceso que resultaran innecesarias.

Tal postura se refuerza cuando el mismo autor cita la postura de Serra (1969) cuando indica que tal interpretación se desarrolla en aplicación de lo que se conoce como: “El método teleológico”, señalando además que este: “apunta en el campo procesal al fin último de la interpretación de las normas procesales: la economía procesal, vale decir, impartir justicia del modo que sea más expeditivo posible, sin perjuicio de las garantías individuales de las partes” (San Martín, 2017, p. 324-325)

Es así como se ve afianzada la postura que orienta a la posibilidad de propiciar la admisión del procedimiento especial de la terminación anticipada en razón de que la interpretación al ser orientada no sólo a los fines de celeridad y seguridad jurídica, también importa el hecho de que se deba ocupar dicho análisis sobre el tema de la economía procesal, aspecto trascendental que se puede ubicar como adecuado ya que dicho procedimiento se condice con tal característica, pues evita etapas innecesarias.

**TOMA DE POSTURA:**

Para poder admitir formalmente la idea de incorporar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, será necesario argumentar la posición del cambio en razón a los siguientes argumentos:

PRIMER ARGUMENTO: El garantismo penal, que orienta la construcción del esquema del proceso como herramienta de ejecución del derecho penal, finalizando con la condena o absolución de un imputado, a fin que se oriente la protección de los derechos fundamentales de las partes que intervienen el proceso común.

SEGUNDO ARGUMENTO: equiparación de las condiciones entre la etapa investigación preparatoria y la etapa intermedia y juicio oral, respecto a la posibilidad de poner fin al proceso ante la existencia del consenso de las partes para finalizar y el control de legalidad respecto a los elementos de convicción precisos para admitirla.

TERCER ARGUMENTO: La interpretación de la regla procesal en razón a la finalidad de la misma, siendo así, debe tenerse en cuenta que la terminación anticipada se proyecta para evitar etapas innecesarias, con lo cual se consolida el principio de economía procesal y como consecuencia de ello la finalidad del principio de celeridad, puesto que permitirá no sólo la ejecución de plazos establecidos mínimos, sino que generaría una disminución de la carga procesal.



## **5.2. La validación de las variables**

El desarrollo adecuado de la construcción de la contrastación depende de un correcto planteamiento en función a las validaciones que se hagan sobre las variables, toda vez que de ellas se construirá la nueva hipótesis ya con el carácter de cientificidad jurídica que se alcanza en la investigación, por lo mismo que se resumen de forma directa las tomas de postura en función a su relación con cada una de las variables a fin de reconocer su validez a través de una afirmación.

### **5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia.**

Es preciso señalar que las variables que se comportan como ejes de la tesis tienen una relación causal para este tipo de investigación, así pues el sentido de la variable independiente se orienta hacia la identificación de la causa del problema, esto es el origen del enfoque, sobre lo cual se ha de verificar cuan viable resulta de modificar o aplicar, pese a su condición estática, así pues se señala que:

El proceso de terminación anticipada tiene un carácter proteccionista que se ampara en la propia estructura del proceso penal, característica que permite establecer a la etapa intermedia como aquella apropiada para el desarrollo de dicho proceso especial.

Dicha postura se basa en tres argumentos, el primero es el garantismo penal, orientado a la protección de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en el proceso común; el segundo es la equiparación de las condiciones entre la etapa investigación preparatoria y la etapa intermedia y juicio oral; y tercero, la interpretación de la regla procesal en razón a la finalidad de la misma, lo cual permitirá la ejecución de plazos establecidos mínimos, sino que generaría una disminución de la carga procesal; en

razón de lo cual se llega a validar la variable independiente bajo el siguiente razonamiento:

**La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia procede a causa de la finalidad que opera sobre esta figura con lo cual se logra la reducción de la carga procesal.**

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común.

En lo que corresponde al papel de esta variable en la relación causal, se orienta a la identificación del efecto del problema, por lo mismo que se podrá reconocer con el resultado si en verdad es posible asegurar las garantías procesales de economía y celeridad en lo que corresponde al proceso común; así pues la validez permitirá constatar dicha viabilidad.

Dada la relación que existe entre la característica de los principios de celeridad y economía con el límite procesal para la aplicación del proceso especial de terminación anticipada, restringido sólo hasta la investigación preparatoria; circunstancia procesal que se advierte como una vulneración de dichos principios y de los derechos del imputado que son limitados respecto del acceso a esta figura procesal de terminación, con lo cual además debilita el sentido garantista del proceso común peruano; en razón de lo cual se consigue validar la variable dependiente bajo la siguiente afirmación:

**Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común, se debilitan en razón del límite para la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.**

### 5.3. Contrastación de la hipótesis

Luego de haber incorporado la construcción crítica como tomas de postura sobre el sentido de viabilidad de las variables a través de su validación, se agrupan los resultados obtenidos como dos nuevas variables con carácter científico adquirido durante la investigación, por lo mismo que de su unión se consigue la formulación de la hipótesis conclusiva que se plasma a continuación:

**La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia procede a causa de la finalidad que opera sobre esta figura con lo cual se logra la reducción de la carga procesal; entonces con ello se evita que las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común, se debiliten en razón del límite para la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.**

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Es admisible el proceso especial de Terminación Anticipada durante la etapa intermedia a partir de una interpretación teleológica de la misma, pues conforma, del mismo modo, un mecanismo de celeridad procesal evitando momentos innecesarios hasta la culminación de la referida etapa	La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia procede a causa de la finalidad que opera sobre esta figura con lo cual se logra la reducción de la carga procesal; entonces con ello se evita que las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común,

	se debiliten en razón del límite para la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia.
--	--

Luego de verificar el contenido de la primera hipótesis, se aprecia que el resultado deviene en la comprobación completa de la misma a través de la hipótesis conclusiva, que desde luego muestra la forma en que la interpretación teleológica sobre el aspecto específico de la función del proceso mismo bajo el carácter de especialidad, debe cumplir, razón que permite reconocer la posibilidad de admitir la terminación anticipada en la etapa intermedia, dado que permite reconocer la forma de brindar celeridad al proceso y conseguir la secuencia procesal bajo el sentido garantista que recaba el criterio de oportunidad.

Tal determinación, conlleva a la reorientación interpretativa de los argumentos que justifican la estructura del proceso, así el sentido que se explica servirá de base para que se generen efectos de celeridad y economía procesal, principios que deben ser recogidos de manera complementaria para dotar de estas características al proceso, y evitar que se desvirtúe el sentido de la figura de terminación anticipada, teniendo en cuenta que se trata de la identificación de espacios dentro de la estructura procesal, sin afectar su naturaleza jurídica.

## CONCLUSIONES

### PRIMERA:

Se ha llegado a concluir en función al desarrollo de la estructura del proceso especial de terminación anticipada para colegir con la etapa intermedia desde una perspectiva constitucional, que, efectivamente el proceso de terminación anticipada tiene un carácter de simplificación procesal que se ampara en la propia estructura del proceso penal, característica que permite establecer a la etapa intermedia como aquella apropiada para el desarrollo de dicho proceso especial, bajo el sentido garantista de acceder de forma libre y oportuna a una sentencia, que es el fin inmediato del proceso penal común.

### SEGUNDA

Revisada la participación e ineficacia de los principios de economía y celeridad procesal, se ha podido identificar la relación que existe entre dicha característica con el límite procesal para la aplicación del proceso especial de terminación anticipada, restringido sólo hasta la investigación preparatoria; circunstancia procesal que se advierte como una vulneración de dichos principios y de los derechos del imputado que son limitados respecto del acceso a esta figura procesal de terminación, con lo cual además se debilita el sentido garantista del proceso común peruano.

### TERCERA:

Se concluye finalmente que, es posible incorporar la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, teniendo en cuenta como argumento, en primer lugar al garantismo penal que debe inspirar a todo ordenamiento jurídico, en segunda lugar la necesidad de equiparar las condiciones entre la etapa investigación preparatoria y la etapa intermedia y juicio oral, y en tercer lugar bajo el argumento de la interpretación de la

regla procesal en razón a la finalidad de la misma, con lo cual se consolida el principio de economía procesal y como consecuencia de ello la finalidad del principio de celeridad, puesto que permitirá no sólo la ejecución de plazos establecidos mínimos, sino que generaría una disminución de la carga procesal.

## **RECOMENDACIONES**

### **PRIMERA**

Se recomienda que la acción estatal respecto al control de la actividad jurisdiccional se reenfoque para dotar a la estructura procesal penal de un elemento indispensable relacionado con el acceso a la terminación anticipada, como derecho a la justicia penal negociada que le corresponde a las partes procesales, a la cual recurren a efectos de recibir un beneficio, el caso del sentenciado una disminución de la pena y en el caso del agraviado obtener una reparación civil en el menor tiempo posible; lo cual en la etapa intermedia es inexistente; asegurándose con ello la inclusión de la característica de celeridad que corresponderá al proceso.

### **SEGUNDA**

Se sugiere que el control se asuma en base al argumento de la interpretación teleológica sobre el aspecto específico de la función del proceso mismo bajo el carácter de especialidad, con lo cual se posibilita la admisión de la terminación anticipada en la etapa intermedia, llegando con ello a la implementación del ordenamiento procesal penal respecto a tal posibilidad, la cual debe estar delimitada hasta antes de la oralización del requerimiento acusatorio.

## BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo Plenario N° 6-2010/CJ-116, N° 6-2010 (Consultorio Jurídico 6 de Diciembre de 2011). Obtenido de [https://derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N6\\_2010.pdf](https://derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N6_2010.pdf)
- Arroyo Acostupa, R. (2016). *La Terminación Anticipada en los Delitos Aduaneros ¿Manifestación de un Derecho Penal Sancionador?* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de [http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9606/ARROYO\\_ACOSTUPA\\_LA\\_TERMINACION\\_ANTICIPADA\\_EN\\_LOS\\_DELITOS\\_ADUANEROS.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9606/ARROYO_ACOSTUPA_LA_TERMINACION_ANTICIPADA_EN_LOS_DELITOS_ADUANEROS.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Canelo Rabanal, R. (2006). La celeridad procesal, nuevos desafíos. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista* 2006, 1-11. Obtenido de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4\\_uibd.nsf/AFD8117BA4D5B7CF05257A7E0077571D/\\$FILE/2006\\_CaneloRaul.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/AFD8117BA4D5B7CF05257A7E0077571D/$FILE/2006_CaneloRaul.pdf)
- Caso Henry Eduardo Castro Paniagua contra la Corte Superior de Justicia de Junín, Exp. 0426-2003- AA-TC (Tribunal Constitucional 24 de Marzo de 2003). Obtenido de <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00426-2003-AA.html>
- Cerron Valverde, E. A. (2015). *Eficacia de la Terminación Anticipada en los Procesos Penales en el Distrito Judicial de Junín*. Huánuco: Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” de Huánuco. Obtenido de [http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/1974/TM\\_Cerron\\_Valverde\\_Elver.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.unheval.edu.pe/bitstream/handle/UNHEVAL/1974/TM_Cerron_Valverde_Elver.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Córdova Rosales, R. A. (2019). *La terminación anticipada. Una mirada al proceso de terminación anticipada con pluralidad de imputados* (Primera ed.). Lima: Instituto Pacífico.
- Díaz Romero, M. L. (2016). *La Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia y su Aplicación como Criterio de Oportunidad en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaura*. Lima: Universidad Autónoma del Perú. Obtenido de <http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/AUTONOMA/378/1/Diaz%20Romero%2C%20Monica%20Lucinda.pdf>
- García Toma, V. (2003). Valores, principios, fines e Interpretación Constitucional. *Derecho y Sociedad*(21), 190-209. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17370>
- Gozaíni, O. A. (24 de Agosto de 2010). *Derecho Procesal Civil y Comercial*. Obtenido de El plazo razonable en los procesos constitucionales: <http://dpccgozaini.blogspot.com/2010/08/el-plazo-razonable-en-los-procesos.html>
- Huacchillo Núñez, Y. (2011). La inaplicación del proceso de terminación anticipada en la audiencia de control de acusación. Cuestionamientos al acuerdo plenario N° 5-2008/CJ-116. *Gaceta Penal y Procesal Penal*, 1- 34.
- Landa Arroyo, C. (2002). El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. *Pensamiento Constitucional*, VIII(8), 445-461. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3287/3129/0>
- León Velasco, S. I. (17 de Enero de 2012). *Poder Judicial*. Obtenido de Las Etapas del Proceso Penal en el NCPP:

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/75aa8b004fdf0858901796541a3e03a6/D\\_Leon\\_Velasco\\_170112.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75aa8b004fdf0858901796541a3e03a6](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/75aa8b004fdf0858901796541a3e03a6/D_Leon_Velasco_170112.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=75aa8b004fdf0858901796541a3e03a6)

Marcelo de Bernadis, L. (1995). *"La Garantía Procesal del Debido Proceso"*. Cuzco: Cultural Cuzco.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2014). *Protocolo de Terminación Anticipada del Proceso*. Lima: República del Perú. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/fc18d88040999db29daedd1007ca24da/Protocolo+de+Terminaci%C3%B3n+Anticipada.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc18d88040999db29daedd1007ca24da>

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. (2017). *Etapas del Proceso Penal*. Obtenido de Investigación Preparatoria: [https://www.mpf.n.gob.pe/elfiscal/etapas\\_proceso/](https://www.mpf.n.gob.pe/elfiscal/etapas_proceso/)

Moreno Catena, V. (2009). El marco de las reformas del proceso penal en Europa y en América Latina. *Ius Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*(24), 215-235. Obtenido de <https://revistaius.com/index.php/ius/article/view/206/200>

Neyra Flores, J. A. (2010). Garantías en el nuevo Proceso Penal Peruano. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal - PUCP*. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/2399/2350>

Oré Guardia, A., & Loza Avalos, G. (2017). La Estructura del Proceso Común en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano. *Derecho y Sociedad*, 163-177. Obtenido de

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/17025/17323/>

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de muestreo sobre la población a estudio. *Int. J. Mothpol*, 227-232. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>

Robles Sevilla, W. A. (2012). Hacia la eficacia y celeridad en el proceso penal peruano: reflexiones en torno a la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en el código procesal penal 2004. *Vox Iures*(24), 1-47. Obtenido de <https://fuzfirma.com/pubpdf/3426e670ca0f42d1108f9f8122e24dfe.pdf>

Rodríguez Hurtado, M. P., Ugaz Zegarra, A. F., Gamero Calero, L. M., & Schönbohm, H. (2012). *Manual de la Investigación preparatoria del proceso penal común*. Lima: Ediciones Nova Print. Obtenido de <https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-la-investigaci%C3%B3n-preparatoria-del-proceso-com%C3%BAn-LP.pdf>

Rodriguez Hurtado, M., Ugaz Zegarra, Á., Gamero Calero, L., & Schönbohm, H. (2019). *Manual de la Investigación Preparatoria del Proceso Penal Común*. Lima: Ediciones Nova Print S.A.C. Obtenido de <https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Manual-de-la-investigaci%C3%B3n-preparatoria-del-proceso-com%C3%BAn-LP.pdf>

Salas Beteta, C. (2011). La eficacia del proceso penal acusatorio en el Perú. *Revista Prolegómenos- Derechos y Valores*, II, 263-275. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3850927.pdf>

San Martín Castro, C. (2017). *Derecho Procesal Penal. Estudios*. Lima: Gaceta Jurídica.

- Sánchez Velarde, P. (Diciembre de 2008). El Proceso de Terminación Anticipada. *Revista Institucional*(9), 47-51. Obtenido de <http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/231/el-proceso-terminaci%C3%B3n-anticipada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Villanueva Haro, B. (2013). La Terminación Anticipada en el Sistema Procesal Penal Peruano. *Derecho y Cambio Social*, 1-22. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476725.pdf>
- Villavicencio Rios, F. S. (2010). Apuntes sobre la celeridad procesal en el nuevo modelo procesal penal peruano. *Derecho PUCP*(65), 93-114. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/3080/3593/>
- Walpole, R., & Myers, R. (1966). *Probabilidad y estadística* (Cuarta ed.). México: McGraw\_Hill.

## ANEXOS



### 1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



## TESIS

**“La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia a propósito de los fines del proceso penal común”**

### CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

**I. Variable independiente: La admisibilidad del proceso de terminación anticipada durante la etapa intermedia.**

2. Es correcto entender a la terminación anticipada es una figura procesal penal que se constituye como una herramienta jurídica que permite el logro de una justicia eficaz y rápida, sin dejar de lado la protección que ofrecen las garantías procesales respecto de los imputados en la investigación penal.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
3. El proceso de terminación anticipada es una figura útil, pero presenta limitaciones generadas por el mismo esquema procesal penal, las mismas que no permiten su aplicación en otras etapas del proceso penal generando indefensión para el imputado o cuando menos la cancelación de la posibilidad de un arreglo.
- a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
4. El sentido del derecho penal garantista alcanza su efecto sobre las reglas procesales, por lo mismo que tales garantías deberían ampliarse respecto de la terminación anticipada para que sea posible ejecutar en la etapa intermedia del proceso penal común.
- a. De acuerdo

- b. En desacuerdo
- c. No opina.

**II. Variable dependiente Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común.**

- 5. Las garantías procesales de economía y celeridad en el proceso penal común tienen una connotación de fluidez de la investigación, propiciándose a través del cumplimiento de plazos en primer lugar y en segundo lugar de la reducción de los procedimientos a fin de economizar tiempo y esfuerzo del aparato judicial y gasto de las partes.
  - a. De acuerdo
  - b. En desacuerdo
  - c. No opina.
- 6. No se aprecia una coincidencia entre el sentido garantista que acoge la terminación anticipada y su aplicación en el proceso penal, en tanto que existe una limitación de ejecución en la etapa intermedia, generando ausencia de tales garantías y demora innecesaria en el proceso y en consecuencia afectación a los principios procesales de celeridad y economía procesal.
  - a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

7. La propuesta de aplicar la figura de terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, activa las garantías que han de caracterizar al proceso penal y promueve la celeridad y economía del proceso penal común

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.